

UNIVERSIDAD DE CUENCA



Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

Carrera de Derecho

TEMA:

El proceso penal en los delitos de tránsito. Análisis de la resolución 176-2014 del pleno del Consejo de la Judicatura y la resolución 09-2016 de la Corte Nacional de Justicia. - estudio de resultados en la Unidad Judicial Penal “K” de la ciudad de Cuenca

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Abogado de los Tribunales de Justicia de la República y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales.

AUTOR:

Juan Carlos Illescas Zhicay
C.I. 0104956305

TUTORA:

Dra. Merci Alexandra Merchán González
C.I. 0103102026

Cuenca-Ecuador

2018



UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

EL PROCESO PENAL EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN 176-2014 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA RESOLUCIÓN 09-2016 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - ESTUDIO DE RESULTADOS EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL “K” DE LA CIUDAD DE CUENCA

RESUMEN

El presente proyecto de investigación contiene un breve análisis del proceso a desarrollarse para aplicación de una sanción a los delitos de tránsito cometidos por los ciudadanos que no le dan la debida importancia a las normas que regulan este tipo de comportamientos, así mismo se realiza un análisis a los cambios que ha sufrido la legislación ecuatoriana en lo que respecta el proceso actual para llevarse a cabo este tipo de asuntos judiciales ya que como sabemos las normas se encuentran en constante cambio con el objetivo de beneficiar a la sociedad, la materia de tránsito entonces no podría desvincularse a esta evolución o cambios en las leyes ya que al ser una actividad cotidiana de las personas se debe seguir implementando reformas para que vayan acoplándose a la realidad y necesidades actuales. De entre todos los cambios realizados a la legislación ecuatoriana se encuentran las resoluciones que han expedido en materia de tránsito tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura, así como también la Corte Nacional de Justicia que son entidades que tiene plena facultad para poder desarrollarlo, esto por la necesidad a que las personas tengan acceso a la justicia sin discriminación alguna y con los mismos derechos y obligaciones dentro de un proceso que con total independencia garantizará que esos derechos sean cumplidos por las autoridades competentes. Es por todo esto que se ha visto o se ha presentado la necesidad de estudiar mediante un debido análisis a las leyes que han beneficiado o no a las personas que se vinculan o están inmersas en este tipo de procesos, por eso se realiza un análisis comparativo de la manera de llevarse estos procesos en la Unidad Judicial Penal “K” de la ciudad de Cuenca para la comprobación de si con las resoluciones antedichas se ha avanzado en beneficio de la sociedad y la justicia misma.

PALABRAS CLAVE: Resolución, transporte terrestre, reformas, proceso penal, desarrollo de proceso, delitos de tránsito.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSITY OF CUENCA

FACULTY OF JURISPRUDENCE, POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES

LAW CAREER

THE CRIMINAL PROCESS IN TRANSIT CRIMES. ANALYSIS OF THE RESOLUTION 176-2014 OF THE PLENARY OF THE COUNCIL OF THE JUDICIARY AND THE RESOLUTION 09-2016 OF THE NATIONAL COURT OF JUSTICE. - STUDY OF RESULTS IN THE "K" CRIMINAL JUDICIAL UNIT OF THE CITY OF CUENCA

ABSTRACT

The present research project contains a brief analysis of the process to be developed to apply a sanction to traffic crimes committed by citizens who do not give due importance to the rules that regulate this type of behavior, as well as an analysis to the changes that the Ecuadorian legislation has undergone in regard to the current process to carry out this type of issues since as we know the norms are in constant change with the objective that is to benefit society, the matter of transit then it could not be disassociated from this evolution or changes in the laws, since being a daily activity of people, changes must continue to be implemented so that they can be adapted to the reality and current needs. Among all the changes made to the Ecuadorian legislation are the resolutions that have issued in transit matters both in the Plenary Council of the Judiciary, as well as the National Court of Justice, which are entities that have full power to develop it, this for the need for people to have access to justice without any discrimination and with the same rights and obligations within a process that, with complete independence, guarantees that those rights are fulfilled by the competent authorities. It is because of all this that we have seen or have presented the need to study that these changes or reforms to the laws have benefited or not the people who have been immersed in this type of issues, that is why a comparative analysis of the way to take these processes in the Criminal Judicial Unit " K " of the city of Cuenca for the verification of whether the aforementioned resolutions have been advanced for the benefit of society.

KEY WORDS: Resolution, land transport, reforms, criminal process, process development, transit crimes.



ÍNDICE

RESUMEN.....	2
ABSTRACT	3
ÍNDICE	4
CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	8
CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	10
DEDICATORIA.....	11
AGRADECIMIENTO.....	12
INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO 1	16
1.- CONSIDERACIONES GENERALES Y ANTECEDENTES DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO	16
1.1.- EL TRANSPORTE TERRESTRE.....	16
2. - CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE DELITOS DE TRÁNSITO. - NATURALEZA DE ESTE TIPO DE DELITOS. - TEORIA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y EL RIESGO PERMITIDO COMO BASE Y FUNDAMENTO. REGULACION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO	19
2.1 EL DELITO.....	19
2.2.- NATURALEZA DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO	20
2.2.1.-FASES O ETAPAS DEL INTER-CRIMINIS O CAMINO DEL DELITO.....	25
2.2.1.1.- Fase Interna	25
2.2.2.2.- Fase Externa.....	26
2.2.2.- TEORIA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y EL RIESGO PERMITIDO COMO BASE Y FUNDAMENTO DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO	29
2.3 REGULACIÓN DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO	32
3.- SUJETOS DE TUTELA	35
3.1 LAS PERSONAS COMO SUJETOS DE TUTELA.....	35
3.2 LOS BIENES COMO SUJETOS DE TUTELA	38



4.- PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SANCIÓN DE UN DELITO DE TRÁNSITO	41
4.1.- DERECHO AL DEBIDO PROCESO PENAL.....	42
5.- GARANTIAS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PARA LA SANCIÓN DE UN DELITO DE TRÁNSITO.....	51
5.1 CONCEPTO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL.....	51
6.- VICIOS DEL DEBIDO PROCESO	59
6.1.- INOBSERVANCIA DE LA FORMA	59
6.2.- FALTA DE COMPETENCIA DEL ÓRGANO	60
6.3.- AUSENCIA DE MOTIVACIÓN	62
CAPÍTULO 2.....	63
EL PROCEDIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO DE TRÁNSITO	63
1.- EL LEVANTAMIENTO DEL PARTE POLICIAL.....	64
1.1 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PARTE POLICIAL.....	68
1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICIA QUE INTERVINO EN EL HECHO.....	68
1.1.2 IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y CRONOLÓGICA DEL HECHO.....	69
1.1.3 INFORMACIÓN DEL HECHO	69
1.1.4 CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO.....	69
1.1.5 FOTOGRAFIAS Y CROQUIS DEL LUGAR DE LOS HECHOS.....	70
1.1.6 DATOS DE LA VÍCTIMA Y/O VICTIMARIOS	70
1.1.7 OBJETOS REGISTRADOS COMO INDICIOS DEL HECHO	71
1.1.8 MEDIOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL POLICIAL	71
2.- RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS	71
3.- PROCEDIMIENTO EN ETAPA PROCESAL EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO.....	74
3.1.- AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS: MEDIDAS CAUTELARES	78
3.1.1 MEDIDAS CAUTELARES.....	80
4.- ETAPA EVALUATORIA Y PREPARATORIA DE JUICIO	89
4.1 FINALIDAD	89



4.2 AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO.....	90
4.2.1 ACUSACION FISCAL.....	90
4.2.2 RESOLUCIONES	93
4.2.2.1 SOBRESEIMIENTO.....	93
4.2.2.2 LLAMAMIENTO A JUICIO.....	94
5. ETAPA DE JUICIO EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO Y CONOCIDA POR DIFERENTE JUZGADOR MEDIANTE NUEVO SORTEO.....	95
CAPÍTULO 3	99
CAMBIOS SOBRESALIENTES EN EL PROCESO PENAL EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO LUEGO DE LAS RESOLUCIONES.....	99
1.- ANÁLISIS. - RESOLUCIÓN 176-2014 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	100
1.1.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	100
1.2.- CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 176-2014 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.....	102
1.2.1.- CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY	102
1.2.1.1.-CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS DE LA RESOLUCIÓN 176-2014 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	103
2.- ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN 09-2016 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	114
2.1.- ANTECEDENTES.....	114
2.2.- COMPETENCIA DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.....	116
2.3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	117
2.4.- PROBLEMA SUSCITADO CON LA NORMATIVA VIGENTE HASTA ANTES DE LA RESOLUCIÓN 09-2016 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	118
2.5.- CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 09-2016 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	119
3.- EFECTOS Y/O RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 09-2016 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EN LA PRÁCTICA	122
3.1.- ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO.	123
4.- CONCLUSIONES	127
5.- RECOMENDACIONES	130



BIBLIOGRAFÍA.....	132
ANEXOS.....	135



UNIVERSIDAD DE CUENCA



Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio
Institucional

Juan Carlos Illescas Zhicay en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de investigación "El proceso penal en los delitos de tránsito. Análisis de la resolución 176-2014 del pleno del Consejo de la Judicatura y la resolución 09-2016 de la Corte Nacional de Justicia. - estudio de resultados en la Unidad Judicial Penal "K" de la ciudad de Cuenca", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 16 de noviembre de 2018

Juan Carlos Illescas Zhicay

C.I. 0104956305



Cláusula de Propiedad Intelectual

Yo, Juan Carlos Illescas Zhicay autor del trabajo de investigación "El proceso penal en los delitos de tránsito. Análisis de la resolución 176-2014 del pleno del Consejo de la Judicatura y la resolución 09-2016 de la Corte Nacional de Justicia. - estudio de resultados en la Unidad Judicial Penal "K" de la ciudad de Cuenca", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 16 de noviembre de 2018

Juan Carlos Illescas Zhicay

C.I. 0104956305



UNIVERSIDAD DE CUENCA

DEDICATORIA

A DIOS

POR SU AMOR, MISERICORDIA Y BENDICIONES

A MI ESPOSA

POR SU AMOR INCONDICIONAL, APOYO Y PACIENCIA

A MI HIJO

DENIS RAFAEL ILLESCAS FERNÁNDEZ



AGRADECIMIENTO

A MIS PADRES:

POR SU ESFUERZO PARA BRINDARME EDUCACIÓN DESDE MI NIÑEZ, POR SU APOYO INCONDICIONAL EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE MI VIDA.

A MI ESPOSA:

DE QUIEN ME SIENTO BENDECIDO POR SER PARTE DE SU VIDA, POR SU APOYO Y AMOR QUE ME BRINDA TODOS LOS DIAS.

A MI TUTORA:

POR BRINDARME SUS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES PARA LA CORRECTA CULMINACION DEL PRESENTE TRABAJO.

A MIS DOCENTES:

POR BRINDARME SUS CONOCIMIENTOS DÍA TRAS DÍA EN MI VIDA ESTUDIANTIL



INTRODUCCIÓN

El proceso penal en los delitos de tránsito es un tema de suma trascendencia por la cotidianidad que se presentan este tipo de asuntos jurídicos a nivel de todo el país y no solo en la ciudad de Cuenca, es esa misma trascendencia la base para un análisis de este tipo de procesos ya que al existir escasos parámetros de investigación surge la necesidad de un estudio actual de todos los cambios realizados a los procedimientos en materia de tránsito a partir de las resoluciones expedidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia y su aplicación en la Unidad Judicial que se ha escogido al azar para conocer la evolución o no en esta materia.

Este trabajo se ha basado en la necesidad de un estudio comparativo para comprobar que las reformas realizadas a la legislación ecuatoriana en materia de tránsito han ido en beneficio de la sociedad que como sabemos es el fin último de toda norma. Así mismo encontramos diferentes tipos de necesidades para el desarrollo del presente trabajo como es la satisfacción de una sociedad que se ha visto involucrado de una manera u otra en este tipo de delitos y que con la normativa anterior a las resoluciones no encontraban o no contaban con la seguridad de una total independencia al momento de emitirse las sentencias, contrario a esto, constantes han sido en la historia las manifestaciones de inconformidad a la hora de aplicar la justicia.

El presente proyecto está basado en un análisis a fondo de todas las variables que han surgido a raíz de la expedición de las resoluciones que son tema del actual trabajo, con la opinión de los profesionales en este tipo de asuntos como: jueces, abogados, fiscales, así como también personas inmersas en este tipo de delitos y servirá para obtener conocimiento y comprobación de los avances que nos traen consigo las resoluciones que son el eje central de esta investigación y análisis.



El método empleado en el presente trabajo es el método MIXTO (EMPIRICO-ANALITICO), por cuanto con el presente trabajo lo que se busca es el análisis y estudio a profundidad sobre las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) y el Reglamento a la Ley de Tránsito en base a las resoluciones antedichas en lo referido a los delitos de tránsito cometidas por las personas en este ámbito del Derecho y al procedimiento actual regulado por la ley. La técnica a aplicarse en el presente trabajo será la documental, ya que se recurrirá a los documentos que contienen los casos prácticos llevados a cabo en la Unidad Judicial Penal “K” de la Función Judicial de Cuenca. Se realizarán encuestas a los profesionales especializados en esta rama del Derecho para conocer su opinión sobre la manera de llevarse a cabo las diferentes etapas del proceso a comparación de los desarrollados hasta antes de las resoluciones mencionadas anteriormente, así como también se considerarán las opiniones profesionales de jueces de la materia.

El presente tema de investigación abarca los cambios efectuados a las normas que regulan este tipo de comportamientos y se dirigirá a un análisis comparativo de los procesos llevados a cabo en la Unidad Judicial Penal “k” de la Ciudad de Cuenca ya que por la cantidad de procesos que ingresan a diario en todas las dependencias penales difícil sería realizar dicho análisis en un solo estudio, empero a ello se limitará a una cierta cantidad de procesos para de esta manera poder visualizar y conocer los cambios o avances alcanzados con las presentes resoluciones y su repercusión dentro de la sociedad a comparación de la manera de desarrollarse este tipo de procesos hasta antes de los años de las resoluciones dictadas por los organismos competentes.

Este análisis se desarrollará en base a los conocimientos adquiridos a nivel estudiantil, ayuda profesional de la Dra. Alexandra Merchán (Directora de Tesis) así como también los

Autor: Juan Carlos Illescas Zhicay



UNIVERSIDAD DE CUENCA

conocimientos que nos brindarán los profesionales y entendidos en la materia que como sabemos al encontrarse día a día en el ejercicio de sus carreras y funciones nos facilitará el poder notar diferencias entre las formas de tramitarse anteriores y posteriores a las resoluciones.



CAPÍTULO 1

1.- CONSIDERACIONES GENERALES Y ANTECEDENTES DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO

1.1.- EL TRANSPORTE TERRESTRE

No se puede hablar directamente de leyes y normas que regulen las actividades de tránsito sin que primero recordemos cómo surgió y se desarrolló en el Ecuador y el mundo entero el transporte terrestre. Fue a partir de los inicios del siglo XVIII que surgen los medios de transporte y se van perfeccionando en el siglo XIX, hasta llegar a su auge en los siglos XX y XXI en sus diferentes campos como lo son el terrestre, marítimo, aéreo; esto por la necesidad de las personas de movilizarse de un lugar a otro buscando siempre comodidades y beneficios como son: el ahorro de tiempo, la velocidad y el poder viajar a grandes distancias a comparación del tiempo aquel en donde el hombre no conocía la máquina y el único transporte al que tenían acceso eran los animales de carga tales como caballos, mulas, elefantes, etc.; y en general la migración únicamente a pie que era el más común.

Así mismo en épocas en donde el ser humano no tenía acceso ni siquiera a animales de carga, las rudimentarias formas de comercialización se las realizaba movilizando los productos a comercializar de un lugar a otro en la espalda y hombros de las personas que llevaban consigo dichos productos, luego al tener ya acceso a pequeños animales de carga el hombre va satisfaciendo sus necesidades para de esta manera poder agilizar de alguna manera su forma de comercio. Luego ya cuando se inventa la rueda y la carreta el hombre crea nuevas formas de transporte para beneficio suyo y de sus semejantes, el hombre entonces comienza a recorrer mayores distancias, conoce nuevos lugares que en épocas anteriores no tenía idea de su existencia.



Es necesario recalcar que en la actualidad los diferentes países del mundo no han alcanzado los mismos niveles de evolución respecto al transporte, esto debido a diferentes aspectos como lo son la pobreza, el subdesarrollo, etc. Aspectos que frenan el desarrollo de un país no solo en ámbito del transporte sino también en el ámbito de la economía en general.

La evolución en materia de transporte como se analiza en líneas precedentes surge, de entre varios aspectos, con la necesidad de acarreo de productos para el comercio, la movilización de largas distancias de las personas, etc. Para con estos puntos lograr una mejor comodidad al momento de moverse y calidad en los productos a comercializar.

En el Ecuador, un país en vías de desarrollo, el avance en materia de tránsito no ha sido el más destacado por los mismos aspectos mencionados anteriormente, de alguna manera se ha tratado de mejorar las condiciones de las carreteras y medios para la comercialización, pero aún falta mucho a mi consideración para que pueda ser un país que se caracterice o destaque por tener los mejores medios de transporte para la industria y comercio tanto interno como externo.

En el Ecuador uno de los ejes que marcó su historia a nivel de transporte fue la construcción del primer ferrocarril, obra iniciada en el gobierno de Gabriel García Moreno y concluida en el año 1895 con el gobierno de Eloy Alfaro, dicho medio de transporte fue de mucha utilidad para el avance en el transporte tanto de personas como también de los productos objetos del comercio.

Con el paso del tiempo con la creación del vehículo y su introducción en varios países de Sudamérica y el mundo, se van generando nuevas formas de relación social ya sea por compartir un medio de transporte o por cualquier otra actuación humana que involucre interrelacionarse.



En la actualidad sería imposible hablar de una convivencia social en donde no se vincule un medio de transporte por las mismas necesidades de los ciudadanos para satisfacer diferentes carencias como lo son el acudir a las diferentes instituciones de labores, para poder viajar a largas distancias, instituciones educativas, centros comerciales o por el simple hecho de requerir un transporte para acudir a un supermercado para adquirir algún alimento o insumo.

Las diferentes problemáticas a las que se enfrenta a diario una persona al utilizar un medio de transporte ha creado la necesidad de la aparición de una ley que regule dicha convivencia social porque actualmente sería impensable el hecho de que las personas se movilicen en sus medios de transporte libremente y sin sujeción a una norma que regule o dicte los diferentes requisitos para poder utilizar el espacio al que tiene acceso para circular. Es así que a lo largo del tiempo se han creado y modificado normas que regulan la circulación de medios de transporte en el suelo ecuatoriano y que cada vez se han ido acoplando a las realidades sociales.

Rememorado lo anterior, ahora es necesario tener claras las definiciones de ciertas palabras que son de suma importancia para el correcto entender del presente trabajo así:

Guillermo Cabanellas de Torres define a:

Resolución como el fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial.

Proceso. - Litigio sometido a conocimiento y resolución de un tribunal.

Transporte es el Traslado, conducción de personas o cosas entre dos lugares.¹

¹ (Cabanellas, 1979)



2. - CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE DELITOS DE TRÁNSITO. - NATURALEZA DE ESTE TIPO DE DELITOS. - TEORIA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y EL RIESGO PERMITIDO COMO BASE Y FUNDAMENTO. REGULACION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO

Para mejor comprender es ineludible el hecho de conocer los diferentes conceptos y definiciones de lo que es un delito de tránsito y su ubicación en la clasificación de los delitos en general, para esto realizaré un breve análisis de los términos que intervienen en el ámbito de la materia de la siguiente manera:

2.1 EL DELITO

El autor Sebastián Soler en su obra derecho penal argentino define al delito como: “**Delito es una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de esta.**”²

De la noción brindada por el autor Soler encontramos los conocidos en el mundo del derecho penal como los **elementos constitutivos del delito** de la cual y a partir de esta definición realizaré un breve análisis o resumen de cada uno de ellos:

Acción. - entendida esta como toda conducta que proviene del ser humano, así también se encuentran enmarcada en este tema el resultado que produce dicha conducta humana, tanto por la comisión como por la omisión de ciertas circunstancias que una persona pudiendo realizar no lo hizo en el momento adecuado.

La antijuridicidad. - conocida también como ilicitud, se trata de una contradicción de dicha conducta que manifiesta una persona con el ordenamiento jurídico de un Estado, no solo una contradicción con el derecho penal o con las leyes que contienen normas afines a esta, sino a toda fuente vigente del derecho que va en contra del orden y paz social.

² (Soler, 1945)



La culpabilidad.es decir que dicha conducta sea reprochable a una persona por el Estado y que sea merecedora de sanción penal, se trata de un límite hasta donde una conducta antijurídica puede ser acreditada a una persona para la aplicación de una pena.

En este punto haré énfasis ya que el término culpabilidad nos servirá como base para poder enmarcar al delito de tránsito entre los diferentes tipos de delitos ya que entre la clasificación de los delitos se encuentran las **clases de delito por la culpabilidad**, para ello inevitable es el requerimiento de este estudio.

La adecuación a una figura, o también conocida como tipicidad, es la necesidad de que el hecho antijurídico cometido por una persona encuadre o se acople a una norma establecida en el ordenamiento jurídico de un estado, dicho de otra manera, para que esa conducta sea considerada como delito es necesario que tal acción se encuentre establecida en la ley de un Estado por eso el aforismo jurídico básico del derecho penal “nullum crimen sine lege” no existe delito sin ley que lo establezca como tal.

Resulta magistral el estudio o análisis a profundidad de cada uno de los elementos constitutivos de un delito para mejor entender todas las pautas para que una acción se enmarque en el ordenamiento jurídico del Ecuador en nuestro caso, más por la proyección del actual trabajo y por la complejidad del tema no lo realizaré, más queda la recomendación para el lector el hacerlo.

2.2.- NATURALEZA DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO

La clasificación de los delitos por la culpabilidad los divide en: delitos dolosos, delitos culposos o imprudentes y delitos preterintencionales.



Los delitos dolosos son aquellos que se cometen con pleno conocimiento y voluntad, la persona sabe que está actuando en contra de un ordenamiento jurídico y que dicha acción corresponde una sanción penal y aun así lo realiza. De este concepto de dolo surgen los elementos del mismo término que son el elemento cognoscitivo y el volitivo del dolo.

El elemento cognoscitivo es aquel en el que una persona sabe que dicha acción es contraria a la ley, es decir, sabe que no debería realizarlo y aun así lo hace.

El elemento volitivo no podría existir sin el primer elemento (cognoscitivo) ya que la persona tiene conocimiento que la acción es penada por la ley, pero a fin de todo tiene la voluntad, el deseo de hacerlo.

En cuanto a los **delitos culposos** el autor Guillermo Cabanellas señala:

“Delito Culposo. - la acción, y según algunos también la omisión, en que concurre culpa (imprudencia o negligencia) y que está penada por la ley. El autor, aun obrando sin malicia o dolo, produce un resultado ilícito que lesiona a la persona, los bienes o derechos de otro”.³

Al respecto del Delito Culposo también el autor Edgardo Donna señala:

“Para tratar este delito se ha elegido, como en toda la obra, utilizar la palabra “imprudente” en lugar de “culposo”. Ello se debe a los fines de evitar confusión con otra palabra: culpabilidad. Son dos palabras que tienen sentido y contenido distinto y suelen confundirse, basta ver algunas traducciones, algunos fallos de la justicia y hasta en el lenguaje común para confirmar esta afirmación.”⁴

³ (Cabanellas, 1979)

⁴ (Donna)



La confusión aparece cuando entendido el termino culpabilidad, aquella se la toma como culposo, lo que es erróneo ya que la culpabilidad como elemento constitutivo del delito hace referencia a la “responsabilidad” es decir, esta culpabilidad puede aparecer ya sea en un delito doloso como culposo. Es por esta circunstancia que el autor Edgardo Donna habla de delito imprudente y no culposo con la finalidad de evitar esta confusión.

Ahora bien, en cuanto a la definición de delito culposo es aquel que una persona comete, pero sin la intención de causar daño o perjuicio ya sea a otra persona o cualquier bien jurídico protegido, el mismo pudo cometerse por Negligencia, Imprudencia o Impericia o al inobservar los reglamentos o leyes pertinentes.

El autor Edgardo Donna al citar a Marco Antonio Terragni expone que:

“Para que esa acción se adecue al tipo tienen que concurrir varios caracteres: a) El individuo no debe haber perseguido la realización del resultado, ni debe haberlo aceptado por no desistir de su acción. De lo contrario el hecho no sería culposo sino doloso (...). b) El agente debe haber sido imprudente, negligente, imperito en su arte o profesión; o haber inobservado los reglamentos o los deberes de su cargo. (...) c) Entre la acción y el resultado debe haber una conexión también normativa, aparte de lo puramente físico.(...)”⁵

Al respecto de la cita expuesta en líneas anteriores es necesario apuntar que de dicho contenido surge la necesidad de estudio del Nexo Causal, punto importante en este ámbito de la materia y que hace referencia a la relación causa-efecto que debe existir para poder establecer los hechos que deben ser considerados para determinar el daño y cual ocasionó el daño tangible.

Sobre el **delito preterintencional** el autor Guillermo Cabanellas lo define como:

⁵ (Dir., 2010)



*“Delito Preterintencional.- El que resulta más grave que el propósito del autor”.*⁶

Al respecto del delito preterintencional encontramos que nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece:

*“Art 26 numeral 2.- Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será sancionado con dos tercios de la pena”.*⁷

Entonces entendemos que, en este tipo de delitos, el resultado mismo de la acción cometida por el autor resulta más grave que el esperado al inicio, va más allá de lo que el autor quiso realizar, es aquel resultado de un proceso en el cual las condiciones, actuaciones fueron variando y al final nos encontramos con un desenlace inesperado y grave. Como ejemplo:

Dos personas, en una discusión, se pelean a trompadas, una cae por un golpe, se da la cabeza contra el piso y ese golpe le produce la muerte, el golpe de puño es un medio que razonablemente no debía producir la muerte, la intención del autor era producir un daño y no matar, el resultado que se produce, que fue la muerte, va más allá de la intención original que buscaba el autor.

Ahora bien, una vez conocidos los diferentes tipos de delitos es requerimiento esencial el acoplar el delito de tránsito a una de estas clases de delitos pues en base a lo ya estudiado se nos hará factible el poderlo encasillar de una manera inequívoca.

El delito de tránsito nace de un delito culposo o imprudente pues son cometidos sin la intención de causar daño o perjuicio a otra persona o bien jurídico protegido, no se tiene la voluntad de generar daño a un tercero pues si la intención y fin de los delitos de tránsito se

⁶ (Cabanellas, 1979)

⁷ (Publicaciones, 2017)



cometieran con conocimiento y voluntad estaríamos hablando de un delito doloso en sus diferentes manifestaciones tales como el asesinato que puede cometerse utilizando un medio de transporte que es una figura penal totalmente diferente a un delito de tránsito. Tampoco podríamos encasillar al delito de tránsito entre los delitos preterintencionales por la misma razón de que el resultado de un delito de tránsito fue más allá de lo que una persona buscaba realizar y terminó en un suceso grave, estaríamos frente a cualquier otra figura penal menos un delito de tránsito, ilógico sería el que una persona pretenda demostrar que cometió un delito de tránsito tal como un atropellamiento pero que el resultado de esa acción no era el de matar o lesionar a otra sino únicamente generarle un susto cualesquiera.

Para poder fundamentar lo establecido en el párrafo anterior, será menester el realizar el análisis de la figura INTER-CRIMINIS o camino del delito para de esta manera poder diferenciar y encasillar al delito de tránsito de las diferentes figuras penales que existen en nuestro ordenamiento jurídico.

Según la publicación del autor Paz Velasco de la Fuente señala:

“El INTER-CRIMINIS “es el conjunto de actos sucesivos que sigue el delito en su realización. En muchos casos el delito no aparece de pronto, sino que sigue un proceso que los clásicos denominaban “inter-criminis” o “camino del delito”. Antes de producirse el resultado, partimos de la simple idea de cometer un delito, idea que surge en la mente del delincuente o agresor, y que termina con la consumación de ese ilícito penal. Todos los actos que van desde la ideación del delito, hasta su consumación es el “inter-criminis”. Por lo tanto, desde el surgimiento del delito, existen diversos momentos o etapas que se dan en la realización del mismo. La importancia de las distintas fases reside en que algunos de los actos



son punibles, pero otros no lo son. Con relación al denominado “inter-criminis” el derecho penal interviene en el momento en que comienza a exteriorizarse la voluntad del autor”.⁸

2.2.1.-FASES O ETAPAS DEL INTER-CRIMINIS O CAMINO DEL DELITO

Lo que nuestra ley sanciona es el cometimiento fáctico del delito, su materialización con resultados cuyo tipo esté establecido en la ley con su respectiva sanción ya que como varios autores manifiestan ilógico es la idea de pensar que la ley debería sancionar todas las etapas que llevan a una persona a cometer una infracción, todas y cada una de las ideaciones que parten del pensamiento de la persona, ideación, planeación, etc. Para mejor entender a continuación un análisis de lo que se trata el “Inter-criminis” o “Camino del delito”. El camino del crimen como es conocido tiene o consta de dos etapas claramente identificadas, estas son:

2.2.1.1.- Fase Interna

Esta fase como manifesté en líneas anteriores, no es punible puesto que en todas sus etapas la verificación del delito no sale o no atraviesa del fuero interior de la mente de la persona hacia la materialización de la misma, no se realiza, pero cabe manifestar que esta etapa nada tiene que ver con la tentativa, figura penal que será objeto de estudio en líneas posteriores así mismo nada tiene que ver con el delito frustrado que aunque no hare referencia queda establecida su total diferenciación.

A) Ideación. - este punto consiste en la concepción de la idea en la mente de la persona, la imaginación de un tipo de delito que se podría cometer, desde este punto parten todas las demás etapas del camino del delito, es la génesis de todo el proceso.

⁸ (Fuente, 2015)



- B) Deliberación.** – es la elaboración del plan con el análisis minucioso o no de las circunstancias en las cuales se podría cometer un delito, en esta etapa el sujeto estudia los motivos para el cometimiento o no de la infracción.
- C) Decisión.** - en esta etapa el sujeto toma la decisión, bajo sus propios motivos, de poner en práctica el plan ideado para el cometimiento del delito, con esta etapa se agota la fase interna del inter-criminis.

2.2.2.2.- Fase Externa

Esta es la etapa punible por el derecho penal, puesto que todas las ideaciones, planeaciones; todos estos puntos dejan de ser tal para materializarse o efectuarse mediante acciones externas, estas acciones ya no solo están en el fuero interno de la persona, sino que se convierten en acciones muchas de ellas sancionadas por la ley.

- A) Manifestación de la idea delictiva.** - En este punto se realizan actos que manifiestan la determinación directa de cometer un ilícito, no causan daño objetivo, es el convencimiento de llevar a cabo todo lo ideado en la fase interna.
- B) Los actos preparatorios.** - en esta se presentan todos los actos que facilitarían la realización del ilícito, no suponen la ejecución del mismo, no son punibles salvo cuando de forma independiente son considerados como tal por el ordenamiento jurídico.
- C) Actos de ejecución.** - consiste en la realización de los actos que encaminan al cometimiento del delito independientemente de si este logra consumarse o no, o se consuma total o parcialmente. Se hace uso de todos los medios posibles para llegar a causar daño objetivo en otra persona o a un bien.



Respecto a este punto y considerando de si el delito llega a materializarse o no, existen con esta diferenciación dos figuras establecidas en nuestro ordenamiento jurídico conocidas como: La tentativa y el Delito consumado, figuras de suma importancia en nuestro tema de estudio ya serán pilares fundamentales para poder sostener la aseveración propia de que los delitos de tránsito son culposos y de consumación que se verifican por el resultado únicamente.

1.- TENTATIVA

El autor Dr. Alfonso Zambrano Pasquel en su publicación de título “Teoría del Delito y Tentativa” manifiesta:

“No nos queda duda de que la tentativa es un delito imperfecto o incompleto porque no se cumple el tipo penal objetivo, aunque el tipo penal subjetivo si se cumple totalmente. Vale decir que estructuralmente la tentativa comporta el ejercicio de una actividad final y un resultado incompleto, que la conducta además de típicamente imperfecta es antijurídica y que al autor se le puede formular un reproche disminuido de culpabilidad con la consiguiente imposición de una pena menor que la que le correspondería por delito perfecto o completo”⁹.

Al respecto nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece: **Artículo 39.** – *“Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito. En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado. Las contravenciones solamente son punibles cuando se consuman”*¹⁰.

⁹ (Pasquel, 1993)

¹⁰ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2017)



2.- DELITO CONSUMADO

El delito consumado es aquel en el que se logran los objetivos de las actividades realizadas en las etapas anteriores tanto de la fase interna como de la externa, en el mismo se verifican los resultados y en muchas ocasiones se generan daños a veces irreversibles, motivo por el cual es merecedor de una sanción penal establecida en nuestra ley.

En conclusión, dentro de los requerimientos para que un tipo penal sea considerado como doloso deben presentarse todas las fases del inter-criminis pues la intención de causar daño debe pasar por todas las etapas preparatorias para el cometimiento de un delito, no así en los delitos de tránsito puesto que para ser considerados como tales, no existen en el mundo jurídico una concepción que establezca que para darse aquello es necesario de una ideación o planeación, en los delitos de tránsito no se presentan ninguno de los requerimientos de los delitos dolosos tanto de la fase interna así como también de la externa o materialización, este tipo de delitos son cometidos sin la voluntad o el objetivo de causar daño a veces irremediable en otra persona o bien jurídico protegido, muchas de las veces incluso algunos autores al referirse a los delitos de tránsito los consideran como una situación de mala suerte, la persona involucrada en tal no planea el atropellamiento de otra, no deambula por las vías con ánimo de elegir a la víctima precisa para lograr sus objetivos.

Las fases del inter-criminis se presentan únicamente en los delitos dolosos, los delitos culposos como lo son los de tránsito son penados por el resultado que produce una actividad humana, así mismo la figura penal conocida como TENTATIVA, se presentan únicamente en los delitos dolosos, no así en los culposos que son penados por los resultados generados, no existe tentativa en los delitos de tránsito. Es por esto y por varios otros fundamentos que nos son de utilidad para poder mantener la aseveración de que los delitos de tránsito son delitos



culposos pues no responden a la ideación de un delito sino más bien al resultado de una negligencia o impericia cometida por una persona cuyo resultado generó daño, es por eso que incluso la ley no es muy severa y no impone penas privativas de libertad excesivas a comparación de los demás tipos penales, es por ello que admite en ocasiones y con los requerimientos del caso que admiten un trámite aplicado al principio de oportunidad.

2.2.2.- TEORIA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y EL RIESGO PERMITIDO COMO BASE Y FUNDAMENTO DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO

Al respecto de lo manifestado podemos encontrar en el mundo del derecho penal a la figura conocida como el RIESGO PERMITIDO y su relación con la TEORIA DE LA IMPUTACION OBJETIVA que nos servirán como base y fundamento para naturalizar al delito de tránsito ya que es una figura trascendental y su ubicación en los delitos estudiados actualmente son requerimiento esencial para acoplar una acción a un tipo penal establecido en la ley. A continuación, realizaré un breve estudio a fin de conocer en qué parte del derecho encaja esa figura y su objetivo.

A) TEORIA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA

Al respecto de la teoría de la imputación objetiva encontramos que el autor Dr. Eduardo Franco nos señala:

“Si el resultado se presenta como realización de un peligro creado por el autor, por regla general es imputable, de modo que se cumple el tipo objetivo. Pero no obstante, excepcionalmente puede desaparecer la imputación si el alcance del tipo no abarca la evitación de tales peligros y sus repercusiones”.¹¹

¹¹ (Franco)



La misma teoría explicada por el autor Manuel Cancio Melia nos explica:

“En breves trazos seguramente toscos podría decir que por imputación objetiva se entiende un conjunto de principios y reglas sistemáticos o cuya sistematicidad se pretende lograr mediante los que se normativizan las descripciones típicas puramente causales”.¹²

Entonces la teoría de la imputación objetiva es aquella que trata de delimitar la responsabilidad penal de una persona ya que manifiesta que un resultado es objetivamente imputable cuando el autor ha sido quien ha creado una situación de riesgo y que se ha confirmado en el resultado de esa situación y que la misma se encuentra establecida y sancionada en la norma.

Si bien esta teoría trata de delimitar la imputación objetiva de un resultado de una situación creada por el autor, nos es elemental diferenciar la situación de riesgo, que en el sinnúmero de delitos que se cometen a diario, el riesgo voluntariamente creado al riesgo permitido ya que dentro de este punto se encuentran los delitos de tránsito y la consideración que ha tomado el legislador para sancionarlos con la creación y codificación de las distintas leyes.

B) EL RIESGO PERMITIDO

El autor José Luis Medina señala:

“El riesgo permitido es considerado, en el marco de la moderna teoría de la imputación objetiva, como un instituto dogmático liberador de la responsabilidad penal. En concreto, permite distinguir entre las conductas inmersas en el tipo penal y las que han de quedar fuera de su alcance, aun cuando hayan producido causalmente el resultado lesivo”.¹³

¹² (Manuel Cancio Melia, 1998)

¹³ (Frisancho.)



Esta figura referencia a todas aquellas acciones peligrosas que a pesar de ser tal, son permitidas el realizarlo teniendo en consideración su utilidad social. Estas deben mantener el cuidado exigible por la convivencia, la realización de estas excluye la tipicidad del hecho punible. Las acciones realizadas en este ámbito no están inmersas en el campo de la ilicitud penal.

Los delitos de tránsito en sus diferentes dimensiones guardan relación con estas figuras penales ya que en ocasiones y con observación a la manera de ser cometidos, el ordenamiento jurídico los sanciona y en otras ocasiones absuelve a los autores ya que no siempre las acciones realizadas o sus resultados son con el objetivo de causar daño a una tercera persona o a un bien jurídico protegido.

En lo que refiere a nuestro tema en específico cabe señalar que los delitos de tránsito son cometidos como manifiesta el Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuando el autor infringe el deber objetivo de cuidado.

Lo que la ley sanciona son los delitos cometidos con conocimiento y voluntad tales como el asesinato, hurto, estafa, que son realizados con pleno uso de las facultades psicológicas de una persona, situación diferente ocurre con los delitos de tránsito que para configurarse como tales existen ciertas circunstancias que llevan a las personas ser los autores de un resultado tipificado por la ley, sean estos por imprudencia, impericia, negligencia, inobservancia a alguna norma o reglamento, así, por ejemplo:

La persona que en estado de embriaguez causare la muerte de otra persona, esto se encuentra claramente tipificado en la ley, pero de lo que trato de dar a entender es que esa persona tuvo la oportunidad de prevenir ese resultado, evitando el conducir en tal estado, empero de ello lo realizó y con ello creó una situación de riesgo y de este mismo tema es de lo que se trata la



teoría de la imputación objetiva, cuyo resultado es penado por la ley aunque la persona al momento de cometerlo no tuvo la voluntad de hacerlo pero por la misma situación de riesgo que el mismo creó, será merecedor de una sanción penal.

En conclusión, los delitos de tránsito nacen de un delito culposo, es decir, aquellos que se cometen sin la intención de causar daño a un tercero o bien jurídico protegido ya que se comenten por negligencia, imprudencia e impericia o inobservancia a alguna norma o reglamento y lo que la ley hace es sancionarlos según las acciones realizadas por el autor. Esta aseveración queda fundamentada con el análisis realizado anteriormente puesto que, el delito de tránsito no cumple en ningún momento con una de las fases internas y algunas externas del “Inter-criminis” o “Camino del delito”, pues son delitos de resultados producto incluso a veces de la mala suerte. No existe dolo en los delitos de tránsito, así mismo no existe Tentativo en dichos delitos por el mismo hecho que son delitos considerados por el resultado dañoso causado.

Aspecto importante es señalar que en este ámbito se sancionan o no también aquellos delitos que se encuentren bajo la figura utilizada en derecho penal que es la del RIESGO PERMITIDO en donde la persona tuvo la necesidad de crear un riesgo, pero no con la intención de causar daño sino con el objeto de proteger algún bien superior como el de la vida como ejemplo.

2.3 REGULACIÓN DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO

Los delitos de tránsito en el Ecuador como en cualquier otra materia se han desarrollado en la promulgación de cada una de las leyes que dicta el legislativo, además se encuentran también reguladas en el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las infracciones llámese Delito o



Contravención, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) y en el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Dentro de la evolución de la Ley de Tránsito en el Ecuador encontramos que en una de las normativas de la ley de ese entonces del 2 de agosto del año de 1996 regulaba de una manera incipiente a los delitos de tránsito de la siguiente manera:

***Art. 71.-** Las penas aplicables a los delitos de tránsito son las siguientes: 1. Reclusión menor ordinaria de seis a nueve años; 2. Prisión de hasta cinco años; 3. Multa de un cuarto a cuarenta salarios mínimos vitales generales; 4. Revocatoria de la licencia de conducir; y, 5. Suspensión temporal de la licencia de conducir.¹⁴*

Lo que ésta ley establecía eran las penas a las que estaban sujetas las personas que cometían un delito de tránsito, una numeración de sanciones a este tipo penal en general, también regulaba las autoridades competentes y la forma de iniciar y sustanciar este tipo de procesos. Punto interesante en el presente tema es que, en la actualidad, con la derogación de las penas de reclusión tanto mayor como menor, se refiere actualmente el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) se refieren únicamente a sanciones, pero no con la denominación de reclusión así como su naturaleza misma cambio en sus diferentes ámbitos pues anteriormente se prestaba para inconvenientes de entendimiento si se estaba sancionando dos o más veces por el mismo delito.

En el año 2008 con la vigencia de la Constitución Política del Ecuador trajo consigo algunos cambios o reformas hechas a la ley de tránsito ya que al ser dicha norma la suprema dentro del ordenamiento jurídico, era necesario que las nuevas leyes de tránsito se vayan acoplando y

¹⁴ (LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, 1996)



guardando concordancia con ella, así por ejemplo respecto a los delitos de tránsito se estableció que tales son de acción pública,

Así mismo la Ley de Transporte que estaba en vigencia en el año 1996 establecía:

“Art. 124.- En los delitos de tránsito, cuando se justifique a favor del infractor circunstancias atenuantes y no exista en su contra ninguna agravante, la pena de reclusión mayor se reducirá a reclusión menor. Las penas de prisión y de multa, se reducirán hasta en un tercio de las mismas, las cuales podrán ser cumplidas con trabajos comunitarios, difundiendo las políticas, reglamentos de prevención y educación, previa capacitación recibida dentro del mismo centro de conformidad al Reglamento que para el efecto se expida”

“Art. 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en la Ley Orgánica de la Función Judicial”

En cuanto al procedimiento:

“Art. 160.- En Los procesos penales por delitos de tránsito, la Instrucción Fiscal se sustanciará en el plazo de 45 días, en lo demás se sustanciará mediante el sistema oral, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, y con las disposiciones de esta Ley”

La promulgación de la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) puesta en vigencia el año 2014 generó reformas en las denominaciones utilizadas en la misma ley de la siguiente manera:

“Sustitúyase en el texto íntegro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las denominaciones "Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y



Seguridad Vial", "CNTTTSV" o "Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial", por "Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En las disposiciones en que se haga alusión a cooperativas de transporte terrestre, compañías de transporte terrestre, cooperativas y/o compañías, léase "operadoras de transporte". Dado por disposiciones generales primera y segunda de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014”¹⁵.

La presente ley se encuentra sistemáticamente organizada en cuanto a las contravenciones en sus diferentes órdenes, así como también a los delitos, otra norma que se encarga de regular la materia es el Código Orgánico Integral Penal y el Reglamento a la Ley de Tránsito. Dichas normas abarcan el alcance de los delitos, así como las formas de haberlo cometidos y bajo las circunstancias que llevaron a una persona a realizarlos tales como el estar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o cualquier otra sujeta a fiscalización y el reglamento se estableció con el objeto de la correcta aplicación de la ley. Dicho Reglamento tiene vigencia hasta la actualidad, claro que, con sus respectivas reformas, pero lo significativo de esto es que, aun existiendo ya un Código Orgánico de la materia, se sigan manteniendo las maneras de llevar los trámites administrativos en una forma independiente.

3.- SUJETOS DE TUTELA

3.1 LAS PERSONAS COMO SUJETOS DE TUTELA

En el Derecho son personas aquellos individuos a quienes la ley les otorga la capacidad de obtener derechos subjetivos y ser sujetos de obligaciones jurídicas.

¹⁵ (Constituyente, 2014)



Para la aplicación de este concepto es inevitable conocer a quienes o a qué protege el Estado con la creación de las normas de tránsito, puesto que no tendría ningún sentido el instituir una norma sin un sujeto que se beneficie y para quien se encuentren garantizados ciertos derechos en sus diferentes ámbitos.

Cabe señalar que el ordenamiento jurídico protege y regula las actividades que realicen tanto las personas naturales como las jurídicas, situación similar sucede con la promulgación de este tipo de normas ya que dentro del sinnúmero de sucesos que ocurren a diario refiriéndome en estricto sentido a las actividades de tránsito nos podríamos encontrar en una coyuntura en donde se vean involucrados en el procedimiento de un delito personas jurídicas como afectados, esto refiriéndome a los daños materiales que pueden surgir a raíz de un suceso de tránsito.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) nos indica el libre acceso que tenemos todos quienes conformamos el estado ecuatoriano al libre acceso a las vías del país:

“Art. 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial”¹⁶.

Es innegable que el sujeto principal de tutela de este tipo de garantías es el individuo quien realiza una actividad de transporte, el Estado es el encargado de brindar las garantías de

¹⁶ (Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, 2017)



protección a las personas quienes utilizamos las calles, vías, y todo lugar donde se pueda transitar, las personas son el sujeto de tutela principal en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto en las leyes de tránsito la situación o su objetivo es el mismo, precautelar los derechos y garantías de un ciudadano al transitar libremente por las vías del Estado ecuatoriano, al respecto la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala lo siguiente:

***Art. 4.-** Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia lengua y ámbito cultural. Para el efecto, el Ministerio del Sector de la Educación en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, desarrollarán los programas educativos en temas relacionados con la prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización considerando la realidad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte.*

Esta norma resalta la obligación en la que se encuentra el Estado ecuatoriano de garantizar todos los derechos en sus diferentes amplitudes que son inherentes a las personas y que sin lugar a dudas dentro de ese gran número de derechos se encuentra el derecho A LA LIBRE CIRCULACION. Para esto el Estado es el responsable de crear los medios para la protección de dichos derechos y es por esa misma obligación que existen las diferentes entidades encargadas de declarar apto a una persona a utilizar un vehículo, por ejemplo, con el otorgamiento de una licencia de conducir de cualquier tipo que esta sea, el trámite de matriculación vehicular en donde se establecen los requisitos tanto legales como técnicos para que un vehículo pueda transitar de manera eficiente en las carreteras del país, para ello las mismas entidades son las encargadas de la revisión vehicular para su matriculación.



Punto importante y como opinión personal al respecto de los tramites de matriculación vehicular y el otorgamiento de licencias de conducir considero que en la actualidad y debido a varios sucesos ocurridos en las vías del país en donde se han visto inmiscuidos tanto vehículos que por su antigüedad ya no son aptos para continuar prestando un servicio público o privado, esto ha ocasionado varios accidentes de tránsito: así mismo en dichos accidentes se han visto inmiscuidos personas que no tienen o no cuentan con una licencia adecuada para utilizar un medio de transporte. Esto denota una clara actitud de irresponsabilidad tanto en las personas que, sin contar con una licencia, conducen un vehículo, así como también sin contar con la matrícula respectiva lo realizan y estas actividades irresponsables no solo las cometen los particulares sino también es claro el notar que no existe un eficiente sistema de revisión y matriculación vehicular y peor aún de otorgamiento de licencias.

3.2 LOS BIENES COMO SUJETOS DE TUTELA

Puede ser considerado un bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación y en consecuencia tiene un valor económico y se encuentra dentro del comercio.

Cuando definimos al término transporte encontramos que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala el traslado de personas, pero también de cosas de un lugar a otro. En este aspecto entonces encontramos que otro sujeto de tutela son los bienes tanto particulares, así como los públicos que son propiedad del Estado.

El Estado es el encargado de velar por los bienes de las personas y también de los propios. Para la protección de las personas y de los bienes es que existen los diferentes tipos de normas, el legislador es el encargado de crearlas según los requerimientos actuales que vive una sociedad como la nuestra, para esto es que se implementan día a día nuevas normas,



reformas y expiden nuevas resoluciones que vayan acorde y en beneficio de las personas de sus bienes.

Así el art 7 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) nos refiere al derecho a la movilidad de personas y cosas, dentro de los derechos que debe garantizar el estado.

Art. 7.-** Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. **En materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial.

En este punto es importante recalcar que dentro de los sujetos de tutela y como acabamos de estudiar se encuentran las personas y los bienes, pero al hacer referencia a los bienes debemos diferenciar que no se tratan solo de aquellos bienes que son objeto de transporte de un lugar a otro, con lo cual se estaría haciendo referencia únicamente a los bienes muebles, sino que dentro de este aspecto se encuentran además los bienes inmuebles. La importancia de esta Diferenciación se basa en la necesidad de que comprendamos que no solo los bienes muebles que son transportados de un lugar a otro podrían sufrir daños a la hora del cometimiento de un delito de tránsito, sino que también podríamos encontrar daños en bienes ya sean del Estado o de particulares que podrían resultar afectados.

El Estado garantiza el cuidado de los bienes ya sean propios o de particulares mediante sus leyes y normas y dentro de esta se encuentra, aunque no es tema del presente proyecto, el código civil ecuatoriano en donde se dedica un libro entero a la regularización de los bienes.



Para fundamentar lo establecido en el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) encontramos la regularización de los daños materiales resultado del cometimiento de un delito y no solo en materia de tránsito sino en general de la siguiente manera:

*Artículo 78.- **Mecanismos de reparación integral.** - Las formas no excluyentes de reparación integral, individual o colectiva, son:*

3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente.

*Artículo 380.- **Daños materiales.** - La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la infracción.*

Con la citación de una parte de la presente norma es claro identificar la protección que el Estado brinda a los bienes propios y de particulares, por lo tanto, es indudable que los bienes son sujetos de tutela de este tipo de normas, puesto que el ordenamiento jurídico creado por el legislador y estudiado y aprobado por los profesionales encargados le brindan esa protección que con el paso del tiempo se han ido modificando y perfeccionando con el fin de precautelar los bienes de todos quienes conformamos el Estado ecuatoriano.

Parte fundamental cumplen o desarrollan los bienes dentro de la investigación de un delito puesto que pueden ser objeto de pericias y toda diligencia para informes pues en muchos



casos son en los bienes en donde se pueden encontrar evidencias para resolver una situación dudosa una vez cumplidas con todas las experticias que pertenezcan o sean propios de cada caso. Esta especificación resalta la importancia que tienen los bienes dentro del mundo jurídico para el análisis y resolución de diversas causas, ya sea de un arma en un asesinato, de un vehículo en un accidente de tránsito, de una propiedad objeto de un robo, hurto, asalto, etc. Pues en cada una de ellas se encontrarán elementos que podrían ayudar a resolver un caso en concreto.

4.- PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SANCIÓN DE UN DELITO DE TRÁNSITO

Para mejor entender es ineludible el tener conocimiento de lo que se trata un principio, Guillermo Cabanellas dice que principio es el fundamento o rudimento de una ciencia o arte. Se trata de las ideas y preceptos básicos sobre los cuales se basan o edifican todo tipo de normas y leyes, pues si no conocemos su trascendencia imposible será llegar a entender el porqué de una norma.

No tenemos una clasificación que nos permita saber cuáles son estrictamente los principios que rigen el derecho procesal penal en delitos de tránsito, empero a ello, analizaremos los principios generales que rigen el proceso penal en general, pues al someterse un delito de tránsito a un proceso penal, nos encontramos con los mismos que regulan el proceso penal en cualquier otro tipo de delito.

En un primer ámbito encontramos que la Constitución Política del Ecuador del año 2008 señala:

Art 11 numeral 9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda



*persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.*¹⁷

En atención de este tema cabe manifestar que si la obligación principal del Estado es el hacer respetar los derechos y garantías de la Constitución y al estar inmiscuido en esa serie de derechos, con lo que contamos las personas, el derecho al debido proceso, es fundamental que el Estado a través de sus instituciones y autoridades se encarguen de regular las actividades de quienes están facultados para administrar justicia para que en cada uno de los procedimientos se apeguen a lo que establece la Carta Suprema, norma magna de nuestro ordenamiento jurídico, y de este modo apliquen las sanciones observando siempre el debido proceso de cada rama.

Así el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su art 2 en adelante establece los diferentes principios sobre los que se basa el proceso penal.

*“Artículo 2.- Principios generales. - En materia penal se aplican todos los principios que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en este código...”*¹⁸

4.1.- DERECHO AL DEBIDO PROCESO PENAL

La Constitución Política del Ecuador establece en su capítulo octavo sobre los derechos de protección lo siguiente:

¹⁷ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2008)

¹⁸ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2017)



Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:(...)¹⁹

Desde el punto de vista doctrinario encontramos que el autor Martin Agudelo Ramírez al hablar del debido proceso señala que:

“El debido proceso es un derecho fundamental contentivo de principios y garantías que son indispensables de observar en diversos procedimientos para que se obtenga una solución sustancialmente justa, requerida siempre dentro del marco del estado social, democrático y de derecho. Es un derecho de toda persona a participar en un procedimiento dirigido por unos sujetos con unas cualidades y funciones concretas, desarrollado de conformidad con las normas preestablecidas en el ordenamiento jurídico, en los que se debe decidir conforme al derecho sustancial preexistente, siempre y cuando se dé la oportunidad de oír o escuchar a todos los sujetos que puedan ser afectados con las resoluciones que allí se adopten”.²⁰

El autor al respecto nos señala que es un derecho fundamental y que por lo tanto debe estar garantizado para cualquier persona, esto con objeto de respaldar el sometimiento de una persona a un proceso justo donde el juzgador quien es la persona que dirige el proceso, observará que se cumplan todas y cada una de las mencionadas garantías, pero el debido proceso no se trata solo del cumplimiento de las formalidades dentro de un procedimiento, este tema va más allá de las simples formalidades extrínsecas que se deben cumplir en todas las materias en donde siempre se regirá por este principio, se trata de dar cumplimiento a todos los derechos y obligaciones que tiene una persona al ser sometido a un procedimiento

¹⁹ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2008)

²⁰ (Ramirez, 2005)



penal ya sea para su arresto, formas de investigación, formas de llevarse a cabo la audiencia y en fin cada etapa procesal que es parte de un procedimiento.

La sentencia dictada por el juez debe ser el fiel reflejo de una verdad y esa verdad debe ser justa, que una persona sea condenada o ratificada su inocencia, pero una vez que se hayan respetado y cumplido con todas las pautas propias de cada procedimiento pues el incumplimiento de una de ellas acarrearía nulidad procesal y por ende una falla en nuestro sistema penal. Este derecho se basa y fundamenta en los siguientes principios procesales:

En palabras del autor Dr. Jaime Santos Basantes nos manifiesta:

“El Debido Proceso dicho de una manera más sencilla, es una garantía ciudadana de carácter constitucional, que debe aplicarse en todo tipo de procesos, es un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez de garantías penales”.²¹

El concepto del autor es el que más se acopla al tema del actual trabajo ya que se refiere estrictamente al debido proceso penal en donde toda persona tiene los mismos derechos y deberes para de esta manera asegurar una verdadera justicia con igualdad de condiciones sin excepción alguna.

El autor Dr. Jaime Santos señala que: “Al respecto cabe señalar que, una sentencia judicial debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado, por lo tanto, no puede haber

²¹ (Basantes J. S., 2009)



sentencia dictada sin que proceda esta exigencia *sine qua non*, lo cual es de gran importancia en materia penal”.²²

Al respecto de los principios me permitiré analizar los que a mi consideración son de suma trascendencia por el ámbito de aplicación del presente, pero no por ello dejare de señalar la importancia de cada uno de ellos, puesto que, con su observancia se garantizarán y protegerán los derechos de las partes que intervienen en un proceso para así brindar seguridad jurídica punto importante en la administración de justicia en todas la materias y no solo en la penal y que se encuentra establecido en el artículo 82 de nuestra Constitución del años 2008, a continuación un breve análisis de los principios fundamentales.

A) PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Lo que nuestro Código Orgánico Integral Penal establece es lo siguiente:

*Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla.*²³

La Constitución en su art 76 numeral 3 establece:

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se

²² (Basantes D. J., 2009)

²³ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2017)



*podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.*²⁴

Este principio al igual que todos los que rigen en materia penal es de gran magnitud jurídica ya que hoy en día sería impensable e incluso ilógico pensar que se sancione o imponga una pena a una persona por un delito que no se encuentre tipificado como tal en el ordenamiento jurídico pues esta es condición sine qua non para la imputabilidad de cualquier tipo de delito. Para que una persona sea imputada por un delito, el mismo debe estar establecido en la ley, cuanto alcance tiene el prefijo latín “nullum crimen, nullum poena sine lege”.

B) INDUBIO PRO REO

La Constitución en primer lugar manda:

En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

El Código Orgánico Integral Penal lo establece:

Favorabilidad: *en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción.*

El Dr. Jairo Renán Andrade en su explicación señala:

²⁴ (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008)



“En materia penal, estamos frente a la duda cuando existe contradicción entre las disposiciones penales que debemos aplicar, cuando no está claro su contenido y alcance, cuando su comprensión es difícil, cuando aun siendo claro el texto de la ley, admite dos o más sentidos. Esta es la duda a la que se refiere la ley penal y cuando se le presente al juzgador la debe interpretar en el sentido más favorable al reo”.²⁵

Como las leyes creadas por el legislador deben ser fiel reflejo y mantener concordancia y relación con la norma suprema, encontramos que la ley se ajusta a lo que la superior manda, esto con el fin de poner fin a un conflicto entre normas que podrían en un momento dado dar lugar a confusiones generando dudas sobre cual aplicar, en este sentido el contenido del principio es claro, se aplicarán a la que más favorezca a la persona infractora. Este principio tiene su fundamento también en el principio de irretroactividad de la norma ya que las normas que se van creando rigen para lo venidero y por lo tanto no se podrán aplicar en perjuicio de una persona sino a su favor.

C) PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La Carta Suprema lo establece:

“**Art 76 #2.** Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”²⁶

Lo regula el Código Orgánico Integral Penal:

“Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutorie una sentencia que determine lo contrario”²⁷.

²⁵ (Guzman D. J., 2013)

²⁶ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2008)



Dicho principio acarrea la obligación de las autoridades competentes de tratar a la persona, acusada de cometer un delito, desde el comienzo de un proceso con un estado jurídico de inocencia hasta que una sentencia condenatoria lo establezca, las personas deben gozar de las garantías y derechos establecidas en la constitución y la ley en todo momento hasta que no se confirme la inocencia.

El autor Alejandro Villanueva Turnes al referirse a la presunción de inocencia señala;

“La relevancia que posee el derecho a la presunción de inocencia reside en que solamente se podrá dictar una sentencia condenatoria cuando exista una actividad probatoria de cargo que se haya practicado debidamente y que provoque el convencimiento del juzgador de los hechos”.²⁸

Para el tratadista Jairo Renán Andrade en su tesis de especialización en Derecho Penal al referirse a la presunción de inocencia explica:

“El principio de la Presunción de la inocencia constituye el presupuesto de la seguridad jurídica en el estado de derecho, es la clave de todo el régimen de las garantías procesales, ya que se trata de un principio fundamental en un régimen democrático, aunque lamentablemente este principio ha sido siempre vulnerado por parte de las autoridades judiciales y policiales, ya que desde que se priva la libertad de las personas, aunque sea para investigación, es tratado como delincuente, es recluido en lugares inmundos, es ofendido y denigrado por los investigadores policiales, pero lo que se espera es que con el nuevo sistema se respeten todas las garantías”.²⁹

²⁷ (Publicaciones, 2017)

²⁸ (Turnes, 2015)

²⁹ (Guzman D. J., 2013)



A criterio personal concuerdo con lo manifestado por el autor ya que en la realidad social que vivimos actualmente una persona desde el momento mismo que es puesta en manos de las autoridades para ser procesada por un delito es tratada ya como un delincuente al que se le ha impuesto una sanción, es encerrado en lugares deplorables, en caso de que sea privado de la libertad una persona corre varios riesgos contra su integridad esto porque una persona privada de su libertad es encerrada en los centros de rehabilitación mismos donde se encuentran ya encarcelados personas con sentencia condenatoria. Así mismo la discriminación social que sufre una persona que es acusada de cometer un delito es irreparable ya que, aunque se encuentre el proceso en fase de investigación y aunque se confirme su inocencia, la sociedad ya establece un juicio de valor perjudicial a una persona.

D) PRINCIPIO DE IGUALDAD

La Constitución manda en su contenido:

“Art 11 #2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación”³⁰.

El Código Orgánico Integral Penal establece:

³⁰ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2008)



“Es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad.”³¹

La igualdad explicada por Rafael Santacruz Lima manifiesta:

“La igualdad entre las partes, como principio en el proceso penal, debe conducirse a favor de los derechos humanos, para ello es necesario una integración y mayor participación de los sujetos que intervienen en el proceso penal, así como el ejercicio para poder debatir durante el proceso penal, con la intención de llegar al objetivo que se propone el proceso, la actuación receptiva de órgano jurisdiccional con respecto a los sujetos procesales, en la búsqueda de una verdad aproximada”.³²

Es indudable la inmanencia de este principio ya que en un sistema gubernamental democrático como el que vivimos es requerimiento esencial la existencia de este principio ya que sería inimaginable que todas las personas no cuenten con los mismos derechos y deberes y aún más importante, en el sistema procesal ya que no se puede hablar de justicia sin tener de frente los derechos en igualdad de condiciones de todas las personas. La constitución establece este derecho de igualdad en todos los ámbitos a sean laborales, de propiedad, de justicia, etc. Algunos autores señalan que la igualdad es el fin último del ordenamiento jurídico de un estado por eso todas las normas que contiene la constitución tratan de generar una igualdad de condiciones en todos los ámbitos sociales.

³¹ (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2017)

³² (Lima, 2017)



Como señalé en líneas anteriores los mencionados son los tomados en consideración en base al proyecto actual pero no por ello podemos dejar de lado la importancia que tienen los demás principios procesales que son pilares fundamentales sobre los cuales se debe regir un proceso a fin de obtener como resultado una sentencia justa ya que si cumplen con todos estos parámetros básicos no habrá lugar a duda sobre su validez, estos son:

Impugnación Procesal, Prohibición de empeorar la situación del procesado, Prohibición de autoincriminación, Prohibición de doble juzgamiento, Intimidad, Oralidad, Concentración, Contradicción, Dirección judicial del proceso, Impulso procesal, Publicidad, Inmediación, Imparcialidad, Privacidad y confidencialidad, Objetividad.

5.- GARANTIAS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PARA LA SANCIÓN DE UN DELITO DE TRÁNSITO

5.1 CONCEPTO DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL

El autor Dr. Ramón Eduardo Burneo señala:

“Garantías constitucionales son los mecanismos o instrumentos que la ley suprema, expresión de la voluntad popular, pone a disposición de los individuos que componen el Estado para que puedan defender sus derechos y libertades, reclamar cuando están amenazados y evitar que sean violados o restringidos, fuera de los casos de excepción que la ley determina; y, les permite obtener la reparación e indemnización cuando hubieren sido definitivamente violados”.³³

El Dr. Jairo Renán Andrade Guzmán al citar al autor García Falconi en su tesis de especialización y maestría en Derecho Penal señala:

³³ (Burneo, 2009)



“Estas garantías, son aquellas instituciones que en forma expresa o implícita están establecidas por la Constitución de la Republica, para la salvaguarda de los Derechos Constitucionales y del sistema Constitucional. De este modo, de acuerdo a la doctrina podemos definir a las garantías constitucionales como: Los mecanismos que la ley pone a disposición de las personas para que puedan defender sus derechos y obtener la reparación cuando han sido violados”³⁴.

Las garantías constitucionales son aquellos mecanismos que la constitución, que es la ley fundamental sobre la cual se basan el resto de normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ponen a disposición del pueblo para que puedan defender sus derechos cuando estos se encuentren amenazados, así como también se hayan ya violado para una reparación integral.

A) DERECHO A LA DEFENSA

La norma normorum (Constitución) de nuestro Estado manda:

Art 76 #7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

- a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.*
- b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.*
- c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.*
- d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.*

³⁴ (Guzman D. J., 2013)



- e) *Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.*
- f) *Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento*
- g) *En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.*
- h) *Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.*
- i) *Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.*
- j) *Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.*
- k) *Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.*
- l) *Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.*



m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.

Respecto al Derecho que tenemos todas las personas a la defensa, encontramos que éste se encuentra garantizado por la Constitución del Ecuador en el artículo señalado pero a consideración personal manifiesto que dicho derecho se encuentra en su más alta expresión en su literal g), ya que en los procesos judiciales que se inician en contra de una persona que se presume ha cometido un delito, desde el momento mismo que es puesto en manos de las autoridades tiene derecho a ser asistido por un abogado para la defensa ya sea particular o el estado tiene la obligación de asignarle uno de oficio ya que contrario a esto se estaría gravemente violando la constitución así como también los tratados y convenios internacionales de los cuales el estado es parte. Privar el derecho a la defensa a una persona en la sociedad actual es incluso atentar contra un proceso jurídicamente valido ya que es formalidad sustancial para que se puede condenar a una persona o no a la privación de su libertad. Un profesional en el Derecho será la persona que se encargue de que todos los derechos y garantías que protegen a una persona se cumplan en cada una de las etapas que conforman un proceso.

B) LOS PROCEDIMIENTOS PÚBLICOS

Respecto de esta garantía la Constitución en su art 76 dispone:

Art 76 #7 literal d.- *Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.*

En intervención y como regula el COIP:



Art 5 #16. Publicidad: todo proceso penal es público salvo los casos de excepción previstos en este Código.

Esta garantía establecida para las partes procesales permite que cualquiera de ellas, así como la sociedad, puedan acceder de manera directa o por medio de su abogado patrocinador a los archivos y a los medios de prueba que interesen dentro de cada etapa del procedimiento, en este aspecto es menester señalar que es de suma importancia esta garantía ya que será de utilidad para la persona imputada de un delito el poder revisar un proceso que se sigue en su contra y poder aportar o presentar pruebas de descargo para el cumplimiento de sus derechos.

Los procesos deben ser públicos no únicamente por los derechos establecidos anteriormente sino por la razón misma de que en cualquier momento la autoridad delegada por el ministerio público puede proceder a fiscalizar la actividad de una autoridad y es por ello que desde el inicio de un proceso el juez debe motivar cada una de sus decisiones dentro de un proceso.

Respecto de este principio existen ciertos procesos que son excepciones claramente establecidas en el Código Orgánico Integral Penal y que son de procedimiento reservado, estos son: aquellos procesos en donde se ven involucrados asuntos de seguridad nacional y aquellos en donde se vean inmiscuidos la integridad tanto física como sexual de niños, niñas y adolescentes.



C) DERECHO A PRESENTAR PRUEBAS

*Constitución Art 76 #7 literal h.- Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.*³⁵

*Código Orgánico Integral Penal Art 5 #13.- Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra.*³⁶

Al hablar del derecho a presentar pruebas en el proceso penal el autor Roberto G. Loutayf Ranea al citar a Ugo Rocco en su obra: “Principio de Bilateralidad o Contradicción” manifiesta:

“La razón de este principio, dice Ugo Rocco, consiste en el hecho que en la función de realización de los intereses tutelados por el derecho hay que tomar en cuenta, no sólo todo aquello que el actor, haciéndose iniciador del proceso, afirma, sostiene y prueba, sino también la posición del demandado, que tiene un interés perfectamente contrario al del actor; y sólo mediante el contraste de la posición del actor y de la posición del demandado podrá suministrarse al juez un exacto criterio de decisión, sobre la base del material de prueba y de las argumentaciones, en hecho y en derecho, que la una y la otra parte hayan desplegado en el desarrollo del proceso”.³⁷

En palabras del D. Jairo Renán Andrade explica:

³⁵ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2008)

³⁶ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2017)

³⁷ (Ranea, 2011)



“A toda persona se le debe dar la oportunidad de presentar pruebas de descargo que procuren desvirtuar los cargos o los elementos de convicción que se hayan generado en su contra. De igual forma el encausado tiene la oportunidad de aplicar el principio de contradicción de las pruebas que se hayan presentado en su contra para lo cual presentara los argumentos válidos que sean necesarios como son los de impugnar informes periciales, repreguntar a testigos, presentación de pruebas documentales, materiales y testimoniales”.³⁸

Esta garantía establecida en nuestra Constitución y en la ley es clara, el director del proceso es el juez, quien se encargará que el mismo se realice con el cumplimiento de todos los derechos y garantías para las partes, así mismo será de su responsabilidad de que cada etapa se desarrolle con observación a cada uno de los parámetros legales que pertenece a ello.

Decir también que en este punto es de suma importancia la intervención y preparación tanto técnica como profesional del Abogado patrocinador y de la Fiscalía ya que como sabemos la presentación de todas las pruebas que interesan en un proceso de una manera oportuna y eficaz acarrearán una sentencia justa, dando la razón a la imputación de Fiscalía o a la ratificación de inocencia de la persona procesada, o únicamente legal si no se sustancia con apego a la verdad y a la ley, a lo referido solo cabe señalar como comparación personal a **la prueba como el corazón mismo de un proceso.**

D) MOTIVACION EN LOS PROCESOS

Constitución Art 76 #7 literal I.- Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente

³⁸ (Guzman D. J., 2013)



*motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados*³⁹.

El Código Orgánico Integral Penal regula en razón de la motivación:

*Art 5 #18.- “Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso”.*⁴⁰

El Ab. Nicolás Salas Parra señala:

“Esta garantía normativa, incluida ya en la Constitución Política de la República del año 1998, ampliada en su alcance y consecuencias en la Constitución del 2008, encadena no solo a jueces sino a todo poder público que emita alguna resolución, el cual ya no puede, so pena de la nulidad de la resolución, dejar de indicar las normas que aplica en cada caso, y como estas se relacionan lógicamente con los antecedentes de hecho que son puestos a conocimiento de alguna autoridad, lo que implica que el convencimiento o razonamiento ya no debe únicamente quedar en el fuero interno del decisor, sino explicitarse y explicarse al destinatario y toda la sociedad”⁴¹.

Dicha garantía implica la obligación de toda autoridad del poder público el explicar y justificar de manera clara y expresa la razón de sus actuaciones en cada una de las etapas y de las providencias dictadas dentro de cada asunto. La inobservancia a dicha garantía puede acarrear nulidad de todo lo actuado por los jueces ya que con el ordenamiento jurídico que nos regula a toda la sociedad está claramente regulado. E juez en cada una de sus actuaciones y resoluciones debe explicar la razón de cada decisión basada en las normas que aplica al

³⁹ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2008)

⁴⁰ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2017)

⁴¹ (Parra A. N., 2010)



tema. Dentro de esta garantía considero que lo más trascendente está en señalar la obligación de la motivación en la sentencia que dicta una autoridad ya que es con esa sentencia en donde se estará poniendo en riesgo la inocencia y por ende la libertad de una persona dando lugar a la inseguridad jurídica que puede causar una sentencia que no se encuentre motivada en todos sus puntos a considerar.

6.- VICIOS DEL DEBIDO PROCESO

Es impensable que como seres humanos integrantes de la sociedad, la existencia de procesos penales aplicadores de todos los derechos y garantías que son innatos para todas las personas ya que por el mismo motivo somos susceptibles al cometimiento de errores en las actividades cotidianas que realizamos aún más en lo legal ya que en ocasiones por descuidos o por el error de alguno de los elementos que intervienen en un proceso nos puede llevar al cometimiento de un error que en ocasiones pueden ser o no subsanables, en este sentido de la ley es clara no así en los errores que afectaron puntos fundamentales para llevar a cabo un trámite.

Dichos errores son conocidos en el derecho procesal como los “Vicios del Procedimiento” y afectan directamente a la validez de un proceso, cabe señalar que contrario a lo que exprese en líneas anteriores estos errores pueden ser cometidos, pero no por voluntad de una parte por un descuido sino incluso pueden ser generados por la intención dolosa de la otra parte para beneficiarse de una u otra manera de tal situación o error.

6.1.- INOBSERVANCIA DE LA FORMA

Existen formalidades tanto extrínsecas como intrínsecas en cada etapa del proceso, las primeras son aquellas que no afectan el fondo o contenido mismo de las actividades del juzgador y por lo mismo, manifiesta nuestro ordenamiento jurídico, pueden ser subsanadas pues no alteran el contexto de la ley y de su mandato. Las segundas son aquellas que de



manera directa o indirectamente afectan al contenido de las normas, actuaciones y toda decisión judicial, si estas se llegaren a cometer no pueden ser subsanados ya que acarrearán nulidad absoluta de la actividad del juzgador y sus resoluciones.

Nuestra norma suprema establece:

“Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”⁴².

En la opinión del Autor Miguel Carbonell:

“Aunque sería imposible en este momento hacer una lista exhaustiva de todas las formalidades esenciales que deben existir en los distintos procesos jurisdiccionales, lo que debe quedar claro es que el concepto mismo de “formalidades esenciales” es un concepto abierto, y que en ese sentido puede y debe ser ampliado por la jurisprudencia siempre que se esté ante un procedimiento jurisdiccional dirigido a realizar un acto privativo que, por sus características especiales, amerite una especial tutela de los intereses en juego”⁴³.

6.2.- FALTA DE COMPETENCIA DEL ÓRGANO

En este sentido y como primer Derecho de una persona, en un proceso penal, el de ser juzgado por una autoridad competente en requisito sine qua non de todo proceso ya que no podemos hablar de procesos acoplados a la constitución garantista de derechos, que manda a ser juzgado por autoridad competente, en donde no se cumpla con este particular ya que desde el

⁴² (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008)

⁴³ (Carbonell, 2012)



momento mismo que una persona es puesta en mandos de la justicia, es un juez competente el encargado desde el inicio de dirigir el proceso.

Como indique la constitución: Art 76 #33. *“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”*.⁴⁴

Esta obligación de ser sujetos a una autoridad competente trae consigo en caso de su inobservancia la nulidad absoluta de todo lo actuado en el proceso en contra del imputado, es por eso que los diferentes procesos de las diferentes ramas del derecho establecen quienes son las autoridades competentes.

En relación al trabajo actual señalo la importancia de dar cumplimiento a este derecho de todas las personas, así en una de las resoluciones, que van a ser objeto de la presente tesis, encontraremos regulado las diferentes autoridades a las cuales les otorga el legislativo la facultad de ser los idóneos para poder sustanciar los asuntos y delitos de tránsito.

“En la publicación del Dr. Marco Terán Luque al citar a Guiseppe Chiovenda, por su parte, dice: Son absolutos los límites deducidos de la materia de la causa. Cuando la ley atribuye a un Juez una causa en atención a la naturaleza de esta, lo hace porque considera a ese Juez más idóneo que otro para conocer de ella; y esta consideración de la ley no tolera un parecer contrario de los particulares”⁴⁵

⁴⁴ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2008)

⁴⁵ (Luque, 2005)



6.3.- AUSENCIA DE MOTIVACIÓN

Como quedó escrito en líneas previas la falta de motivación de todas y cada una de las actuaciones del juez director del proceso acarrea nulidad absoluta ya que deben fundamentar sus decisiones en la norma y en Derecho para que no resulten en el mundo de la ilicitud de acto.

Las motivaciones de los actos judiciales están reconocidos y garantizados por la constitución y los tratados y convenios internacionales de los cuales el Ecuador es parte y su inobservancia resulta en un acto ineficaz ya que se estaría incumpliendo con las leyes supremas. Estas obligaciones de motivación en asuntos de tránsito son de ponderante interés en el presente ya que de ello dependerá la libertad y vida de una persona, poner en libertad o privarla de ella no puede ser objeto de juego o desinterés de los juzgadores



CAPÍTULO 2

EL PROCEDIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO DE TRÁNSITO

Como en cualquier proceso penal, en los delitos de tránsito el procedimiento a seguirse desde el inicio mismo debe cumplir con todos los requerimientos de manera estricta, pues ello asegurará el cumplimiento del debido proceso, un trámite válido, que cumpla con todos los requisitos legales tanto formales como sustanciales o de fondo, ya que sin la observación de cada uno de los elementos legales mal podríamos estar hablando de un debido proceso y por ende una sentencia justa, contrario a ello estaríamos al frente del cometimiento de desacato al ordenamiento jurídico de nuestro Estado, a continuación detallaré los pasos que deben observarse para que dicho proceso cumpla con todas las normas y garantías constitucionales:

Dentro de las formas de cómo puede la información del cometimiento de un delito de tránsito llegar a conocimiento de un agente fiscal y para ello iniciar con las investigaciones del caso, se debe hacer referencia que la misma puede presentarse bajo varias opciones que nos presenta la figura de la Noticia Criminis.

Al respecto el autor José A. en su Diccionario jurídico señala al respecto:

“Éste es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, que opera como "información institucional", sujeta a recaudos específicos impuesto por la ley procesal, capaz de producir efectos jurídicos previamente previstos por la ley. Supera a la mera información”⁴⁶.

⁴⁶ (Garrone, 2005)



Entonces, a la serie de formas de conocer un delito en general y de tránsito en específico se las conoce como Noticia Criminis o “Notitia Criminis”, las mismas se pueden presentar por denuncia, querella y la prevención policial o de oficio que es la que usualmente se presenta y bajo los términos de la cual se trabajará este tema de investigación.

1.- EL LEVANTAMIENTO DEL PARTE POLICIAL

Nuestra Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) establece.

“Art. 163.- El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de la infracción.

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal de su jurisdicción, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes hagan sus veces.

El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en falsedad en cuanto a las circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación por sustancias estupefacientes o psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser objeto de la acción penal correspondiente y condenado al pago de daños y perjuicios ocasionados.

Las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados a cargo de la administración de vías, avenidas y autopistas que posean sistemas de pago de peajes y peaje automático, deberán entregar a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un reporte fotográfico que evidencie e identifique el



automotor; y, el lugar del suceso sobre el cometimiento de la contravención de evasión de peajes y peaje automático”⁴⁷

El parte policial emitido por el agente de tránsito es de suma trascendencia en el proceso ya que será el primer indicio que cuente la autoridad competente que en este caso será la fiscalía por ser delito de acción penal pública para que este a su vez de a conocer al juzgador y pueda pedir que se dicten medidas cautelares de ser necesarias, una vez cumplidas todas las formalidades y requerimientos legales para poder garantizar la concurrencia del imputado al órgano de justicia. El parte policial suple en ocasiones a la denuncia presentada por particulares ya que serán informes necesarios para que de apertura una investigación en la Fiscalía General del Estado en una de sus salas especializadas como en Cuenca lo son las Fiscalías Especializadas en Accidentes de Tránsito.

Nuestra ley establece que en su contenido el parte policial debe describir una relación detallada y minuciosa de los hechos y de las circunstancias del incidente y es por esto que el agente de tránsito o la autoridad a cargo debe ser muy cauteloso a la hora de emitir su informe ya que servirá de mucho ya judicializado el documento, es de suma importancia ya que podría ser considerado como prueba a favor tanto de la víctima como del presunto victimario. Así mismo la ley le da al organismo policial o agente de tránsito el plazo de 24 horas para que ese informe policial sea puesto en manos de la fiscalía caso contrario será sancionado, en la misma situación y obligación se encuentran los órganos de control de los GADS también deben cumplir con todas las obligaciones, deben incluso tomar fotografías del lugar del cometimiento de la infracción o delito, todo esto en apego a la verdad de los hechos porque caso contrario pueden ser objeto de acción penal y ser obligados a pagar daños y perjuicios

⁴⁷ (Constituyente, 2014)



ocasionados a la parte afectada de la falsedad en el informe que podría darse en determinadas situaciones a más de la acción penal respectiva.

Respecto a lo señalado anteriormente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es clara en su contenido:

***Art. 165.-** Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en un accidente, siempre que cuenten con los elementos o indicios probatorios estarán facultados para detener al o los presuntos autores de un delito de tránsito, en donde resultaren heridos o fallecidos una o varias personas; y, ponerlos a órdenes del Fiscal, que de manera inmediata solicitará la expedición del auto de prisión al Juez de turno, para la realización de la audiencia de formulación de cargos. Los vehículos serán aprehendidos como evidencia de la infracción de tránsito.*

La ley señala que el agente de tránsito u órgano de control que realizare el parte policial tiene 24 horas para poner en conocimiento y en manos del agente fiscal que de manera inmediata debe solicitar al juez la audiencia respectiva para solucionar la situación del detenido, esto en caso de delito flagrante, del procedimiento ordinario corresponden las investigaciones del caso y bajo sus reglas respectivas. Pero allí no termina la obligación y responsabilidad de la autoridad que emitió el informe, sino que además en caso de ser requerido por el juzgador, en todas las etapas de un proceso, de la versión y la información respectiva, el agente deberá colaborar con la justicia en todas sus fases.

***Artículo 458.- Preservación de la escena del hecho o indicios.** - La o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal especializado.*



Iguals obligaciones tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente delictivo.

Esto tiene su objeto y es que no se altere el lugar de los hechos, así como los elementos de prueba dejados en el lugar de los sucesos, el agente que se encuentre en el lugar debe mantenerlo intacto hasta que lleguen los organismos especializados para la toma de muestras y pruebas que servirán al proceso.

En cuanto a la valoración que le debe dar el juez al parte policial la ley establece: **Art. 164.-** *Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el juez considerará el parte policial como un elemento informativo o referencial.*

La ley brinda un carácter informativo a los partes policiales emitidos por las autoridades, situación que personalmente no comparto pues es este documento el que da inicio al trámite para las investigaciones previas, son de suma importancia y a mi parecer en la ley se le estaría disminuyendo el ámbito de importancia de este tipo de documentos.

Punto importante es manifestar que, dentro de la preservación de la escena del hecho, dentro del lugar pueden encontrarse también evidencias que ayuden a resolver el caso y que posterior a su hallazgo deben ser trasladadas al centro de investigación respectivo, este punto es de suma importancia y la ley es clara al regular la forma de movimiento de las evidencias, hago referencia a la Cadena de Custodia que dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) se encuentra regulada de la siguiente manera:

Artículo 456.- Cadena de custodia. - *Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las personas que intervienen en la recolección,*



envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación, el personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación.

1.1 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PARTE POLICIAL

Lo que la ley establece es **Art. 163 LOTTTSV.** - *El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de la infracción.*

Todo esto de manera general pero ya en la práctica analizare el contenido mismo de un informe o parte policial, mismo que será anexado al trabajo:

1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICIA QUE INTERVINO EN EL HECHO

En este punto se encuentra toda la información para conocer a las autoridades que intervinieron en el hecho, al distrito que pertenece dicha unidad de policía, se encuentra especificado por distrito, circuito y unidad de policía, todo esto con el objeto de personalizar a la persona que lo emitió para poder solicitar luego su asistencia para investigaciones previas o en etapa de proceso en caso de ser necesario. Así también si posterior a ello en las



investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado se encuentran indicios de falsedad en el informe o parte policial poder saber los nombres de las respectivas personas para aplicar la sanción del caso.

1.1.2 IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y CRONOLÓGICA DEL HECHO

El parte policial que es remitido a la Fiscalía debe contener la información detallada del lugar exacto en donde ocurrieron los hechos ya que será en ese mismo lugar en donde se realicen las investigaciones posteriores ya sean toma de muestras, huellas, etc. En esta parte se especifican si el lugar es público o privado, hora aproximada de los sucesos, fecha, esto como información cronológica.

1.1.3 INFORMACIÓN DEL HECHO

Si bien lo que la ley dice es que deben detallarse los hechos, en esta parte el agente policial de tránsito comunica de donde se obtuvo la información para trasladarse al lugar de los hechos que pueden ser por operativos policiales ordinarios, por llamadas a las autoridades o por aviso del ECU 911 que es el sistema que se encuentra implementado a nivel nacional en nuestro Estado. Punto importante es el dato en donde se especifica si en dicho lugar se encontraron datos posteriores al hecho o en flagrancia del mismo. Es ilógico pensar que una autoridad emitió un informe policial sin dar a conocer de donde obtuvo la información del incidente a menos de que se haya presenciado el hecho, la información siempre serán de llamadas telefónicas o avisos personales.

1.1.4 CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO

En un inicio se especifica el nombre del agente policial que eleva el informe o parte policial y su rango dentro de su institución. Posterior a ello y como señala la ley se detallan de manera



minuciosa todos y cada uno de los datos encontrados en el lugar, así como también de donde se obtuvo el llamado de auxilio o si fue dentro de un operativo en el cual se encontraron con dicha circunstancia. Se debe detallar todas las actividades realizadas por las autoridades de investigación que realizaron en tal lugar con el fin de conseguir los primeros indicios de los hechos. Se detallan de manera minuciosa todos los hechos porque son los elementos a investigar por parte del agente fiscal de donde brotarán los hechos más relevantes para poder imputar cierto grado de culpabilidad a las personas involucradas en el hecho o así mismo eximirlos de ella.

1.1.5 FOTOGRAFIAS Y CROQUIS DEL LUGAR DE LOS HECHOS

En este aspecto debe adjuntarse las fotografías tomadas por los agentes, así como el croquis del lugar en donde sucedió el hecho, esto por la obligación que trae el artículo 163 de la LOTTTSV ya que servirá como base para posteriores investigaciones y también porque luego los agentes podrían ser llamados a rendir declaración ya en la fase procesal del delito. Serán los lugares en donde se realizarán las investigaciones previas por parte de la Fiscalía como reconocimiento del lugar, toma de muestras, etc.

1.1.6 DATOS DE LA VÍCTIMA Y/O VICTIMARIOS

Se deberá detallar los datos de las personas implicadas en el delito de tránsito, tanto de la víctima como del presunto victimario, su número de identificación, estado civil, discapacidad, etc. Dentro del mismo se encuentran las observaciones al mismo dato en donde se especifica los datos de las personas fallecidas de ser el caso.



1.1.7 OBJETOS REGISTRADOS COMO INDICIOS DEL HECHO

Aquí se encuentran enumerados los datos de objetos que sirvieron o que intervinieron en el hecho, en caso de los delitos de tránsito se encuentran los datos del vehículo que como sabemos serán retenidos en los patios de retención vehicular que en el caso de Cuenca es la Institución Empresa de Movilidad (EMOV-EP). En este se detalla el estado actual del vehículo y de todos los demás artefactos luego de los sucesos, que luego de las experticias realizadas serán devueltas a la persona que justifique su propiedad dentro de 72 horas.

1.1.8 MEDIOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL POLICIAL

En este se encuentra señalado las autoridades que se encontraban presentes y que se encargaron de todas las actividades en el lugar del delito, su grado en la institución policial y la forma en la que intervino en dicho lugar ya sean jefes de patrulla, auxiliar, conductor, etc.

2.- RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS

El procedimiento respecto al reconocimiento del lugar de los hechos en el COIP está claramente detallado ya que son medidas obligatorias para no perder ningún detalle de lo ocurrido y para que resultado de esto se puedan solicitar por parte de la Fiscalía medidas cautelares pertinentes, nuestra ley lo que procura es el desarrollo legal del proceso desde su inicio para poder garantizar la validez del mismo.

Una vez realizado y puesto en manos de la fiscalía el parte policial, será esta entidad quien se encargue de emitir y ordenar las diligencias previas de investigación y dentro de ellas se encuentra el reconocimiento del lugar detallado a continuación:

“Artículo 460 COIP. - Reconocimiento del lugar de los hechos. - La o el fiscal con el apoyo del personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias



*forenses, o el personal competente en materia de tránsito, cuando sea relevante para la investigación, reconocerá el lugar de los hechos de conformidad con las siguientes disposiciones(...)*⁴⁸:

Esto en la práctica resulta ser de mucha utilidad al proceso ya que las autoridades competentes encargadas de realizar el reconocimiento del lugar deben tomar las pruebas necesarias de manera minuciosa sin dejar de lado ningún detalle, ningún indicio de responsabilidad, todo lo que aporte en honor a la verdad a la justicia. Me atrevería a decir que el reconocimiento del lugar constituye la decisión misma del proceso ya que es en ello, en el lugar que ocurrió el delito o la infracción en donde van a quedar marcadas las pruebas fehacientes de responsabilidad o no de inocencia. La obligación que tiene la autoridad en no permitir el ingreso o salida del lugar de personas que se encuentren en el lugar responde al objetivo de no entorpecer las actividades que realizan o que se puedan alterar las pruebas que queden en el sitio donde ocurrió todo. Así mismo pueden tomar las declaraciones de las personas que estuvieron presentes en el cometimiento del delito que en lo posterior pueden ser llamados por la autoridad a rendir declaraciones incluso de manera coactiva con uso de la fuerza pública.

La ley faculta a los agentes de tránsito el poder arrestar a una persona que se presume estar implicado en el hecho delictivo que será materia de investigación, esta misma facultad termina en el momento mismo de que ponen en manos de la fiscalía a la persona aprehendida ya que será la fiscalía quien intervenga y pida las medidas necesarias al juez de turno.

Una vez realizadas las actividades que constituyen el reconocimiento del lugar, todas las pruebas o vestigios hallados en el mismo son puestos a disposición de la fiscalía que es un

⁴⁸ (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2017)



órgano encargado de realizar las investigaciones pertinentes y que puedan pedir las medidas adecuadas al proceso.

Todos los vehículos implicados en un delito de tránsito son trasladados a los patios de retención vehicular de la respectiva jurisdicción a fin de que sean objeto de las pericias pertinentes y la ley dice que deben ser dentro de 72 horas, me permito opinar en este punto ya que en muchos de los casos esto en la práctica no se cumple de manera adecuada ya que si bien la ley da un tiempo, en la realidad los tiempos sobrepasan en exceso los mismos y creo de manera personal que dejar que transcurra demasiado tiempo entre la aprensión del vehículo y la realización de la pericia, pueden desaparecer de una u otra manera las pruebas que pueden ser consideradas en la investigación. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial al respecto señala que, una vez realizada la pericia al vehículo implicado, este debe ser devuelto al propietario de manera inmediata cuestión que en la práctica refutan con lo que dice la ley porque por cuestiones de trámite los mismos son devueltos en tiempos extremadamente tardíos.

En el tema actual es necesario el estudio de las figuras conocidas como Causa Basal y Causa Concurrente pues serán puntos importantes para poder reconocer o no la responsabilidad de una persona que se presume cometió un delito de tránsito. Al respecto el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala:

“Causa Basal. - es aquella circunstancia que interviene de forma directa en la producción de un accidente de tránsito y sin la cual no se hubiera producido el mismo



***Causa Concurrente.** - son aquellas circunstancias que por sí mismas no producen el accidente, pero que coadyuvan a su materialización”⁴⁹.*

Dichas figuras juegan un rol importante en el desarrollo de un proceso para la sanción de un delito de tránsito puesto que serán circunstancias que deberá valorar el juzgador a la hora de emitir una sentencia ya que una persona pudo haber cometido un delito de esta naturaleza, pero en su materialización pueden encontrarse indicios determinantes de responsabilidad o de inocencia.

3.- PROCEDIMIENTO EN ETAPA PROCESAL EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO

Todo lo relacionado al tema anterior constituye la fase pre procesal conocida en Derecho como INVESTIGACION PREVIA en delitos de tránsito ya que son el inicio para poder ejercer una acción en contra de una o varias personas, en ella se desarrollan y obtienen los elementos llámense presunciones, indicios supuestos que direccionarán a la o el agente fiscal para poder continuar con el proceso una vez que cuente con los elementos necesarios iniciar la Instrucción Fiscal con la respectiva audiencia de formulación de cargos, solicitar medidas cautelares y todas las actividades de las cuales se encuentra facultada la o el agente fiscal y están establecidas en la ley en el artículo 443 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Recordando que esta fase (Investigación Previa) cuando el delito ha sido cometido en flagrancia se realiza dentro de las 24 horas posteriores a los hechos, de no ser el caso el tiempo de duración de la investigación previa en delitos cuya sanción sea la privación de la libertad menor a cinco años dura 1 año, para delitos cuya sanción es de pena privativa de libertad de más de 5 años, la investigación puede durar hasta 2 años, en donde no se hablan todavía de procesados sino únicamente sospechosos en contra de quien se efectúa la investigación.

⁴⁹ (Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012)



La etapa procesal para la sanción de un delito, entre ellos los de tránsito, inicia con la instrucción fiscal desde la audiencia de formulación de cargos que de acuerdo al trámite y a los requisitos establecidos en la ley lo sustanciara el juez que conocerá del proceso a petición del o la agente fiscal toda vez que cuente con los elementos necesarios para formular cargos a una persona y porque la misma reúna y cumpla con todos los requisitos del caso.

***Artículo 591 Código Orgánico Integral Penal. - Instrucción.** - Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación.*

Cabe señalar que en este punto las personas involucradas en el asunto en la calidad de procesado, puede a través de su Abogado Patrocinador o del Defensor público de ser el caso acogerse al procedimiento Abreviado, cuando dicha persona acepte la responsabilidad del delito de tránsito, esto con el fin de evitar el tiempo que se tardan las investigaciones en cada caso, siempre y cuando el abogado defensor público o privado comunique de una manera clara al imputado de las consecuencias que trae admitir el hecho que se le imputa y de los acuerdos que se podría llegar a tener con la Fiscalía. Respecto a este tema encontramos tipificado en el artículo siguiente.:

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

***Artículo 635.- Reglas.** - El procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas:*

- 1. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años, son susceptibles de procedimiento abreviado.*
- 2. La propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de*



evaluación y preparatoria de juicio. 3. La persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. 4. La o el defensor público o privado acreditará que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales. 5. La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado. 6. En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal.

2. **Artículo 636.- Trámite.** - *La o el fiscal propondrá a la persona procesada y a la o al defensor público o privado acogerse al procedimiento abreviado y de aceptar acordará la calificación jurídica del hecho punible y la pena. La defensa de la persona procesada, pondrá en conocimiento de su representada o representado la posibilidad de someterse a este procedimiento, explicando de forma clara y sencilla en qué consiste y las consecuencias que el mismo conlleva. La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal. La o el fiscal solicitará por escrito o de forma oral el sometimiento a procedimiento abreviado a la o al juzgador competente, acreditando todos los requisitos previstos, así como la determinación de la pena reducida acordada.*
3. **Artículo 638.- Resolución.** - *La o el juzgador, en la audiencia, dictará su resolución de acuerdo con las reglas de este Código, que incluirá la aceptación del acuerdo sobre la calificación del hecho punible, la pena solicitada por la o el fiscal y la reparación integral de la víctima, de ser el caso. Artículo 639.- Negativa de*



aceptación del acuerdo. - Si la o el juzgador considera que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en este Código, que vulnera derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado a la Constitución e instrumentos internacionales, lo rechazará y ordenará que el proceso penal se sustancie en trámite ordinario. El acuerdo no podrá ser prueba dentro del procedimiento ordinario.

Respecto de este tipo de proceso el autor José Sebastián Cornejo al citar a Darío Jarqué, en su obra “Juicio abreviado y suspensión de juicio a prueba” manifiesta que:

“En este tipo de procedimiento existe un consenso entre el Fiscal y el procesado, mediante el cual éste último asume los hechos fácticos de la acusación, a cambio de lo cual el representante de la Fiscalía mociona una pena mínima como sanción. Partiendo de este concepto, podemos determinar, que lo que se busca con este procedimiento es concluir el proceso penal de la manera más rápida”⁵⁰.

Entonces en este tipo de procedimiento penal existe un acuerdo entre el imputado de un delito y la Fiscalía General del Estado mediante el cual el procesado admite su responsabilidad en los hechos facticos del delito y a cambio de ello la autoridad encargada de las investigaciones precias solicita al juez penal competente la pena mínima establecida en el ordenamiento jurídico a dicho imputado. Esto tiene sus razones lógicas a mi parecer por la cantidad de casos de los cuales está a cargo de las investigaciones la Fiscalía General del Estado, esto siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la ley para poderlo aplicar.

⁵⁰ (Cornejo, 2016)



3.1.- AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS: MEDIDAS CAUTELARES

Como lo señala el Código Orgánico Integral Penal, con esta audiencia inicia la etapa de instrucción fiscal, una fase en donde el o la Agente fiscal pone a conocimiento de las autoridades competentes la identificación pormenorizada de todos y cada uno de los elementos recabados para procesar a una persona por el cometimiento de un delito, así como también constituye una etapa para continuar con las investigaciones necesarias para poder pedir una sentencia condenatoria de ser el caso ya en la etapa de juicio.

Artículo 594 COIP. - Reglas. - *La etapa de instrucción se sustanciará conforme con las siguientes reglas:*

- 1. Cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará a la o al juzgador, convoque a la audiencia de formulación de cargos.*
- 2. La o el juzgador, dentro de veinticuatro horas, señalará día y hora para la audiencia, que deberá realizarse dentro de los cinco días posteriores a la solicitud, salvo los casos de flagrancia y notificará a los sujetos procesales.*
- 3. La o el fiscal deberá agotar todos los medios necesarios que permitan identificar el domicilio del investigado.*
- 4. La o el fiscal, en audiencia, formulará cargos cuando existan elementos sobre la existencia de la infracción y la participación de la persona en el hecho investigado.*
- 5. A la audiencia de formulación de cargos deberá comparecer la o el fiscal, la persona procesada o su defensora o defensor público o privado.*



6. En esta audiencia, si la persona procesada considera pertinente podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de los derechos y garantías en la forma y términos previstos en la Constitución y en este Código.

7. Los sujetos procesales quedarán notificados en la misma audiencia con el inicio de la instrucción y las decisiones que en ella se tomen.

El contenido íntegro de la audiencia quedará registrado en el expediente y por cualquier medio tecnológico.

En cuanto a las reglas en las que se debe desarrollar una audiencia de formulación de cargos se encuentra estrictamente señalado en la ley, lo que hay que recalcar es que el Código Orgánico Integral Penal establece tiempos específicos para su duración así como también reduce el tiempo de instrucción fiscal en este tipo de delitos al establecer como máximo el de setenta y cinco días y en delitos flagrantes del de sesenta días, esto por la razón misma de agilizar el proceso y no vulnerar garantías básicas con las que cuentan todas las personas y no podrían estar más tiempo privadas de su libertad sin una sentencia condenatoria que lo establezca.

Artículo 595 COIP. - Formulación de cargos. - La formulación de cargos contendrá:

1. La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo.

2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputen.

3. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular los cargos.



La solicitud de medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al procedimiento o cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso.

Punto importante constituye la audiencia de formulación de cargos en donde la o el agente Fiscal anunciara todos los elementos de los cuales tiene conocimiento y lo que le llevo a formular cargos. En este aspecto debo manifestar que los y las agentes fiscales deben formular los cargos y solicitar medidas cautelares con sumo apego a la ley e imparcialidad al hacerlo, mal podrían estar haciendo dichas autoridades el formular cargos y llevar a juicio a una persona por el hecho de presiones políticas, temor a perder el cargo, etc. que como hemos visto en nuestra realidad social no son temas desconocidos por la ciudadanía, un agente fiscal debe tener no solo preparación profesional al momento de acudir a un juez a solicitar las medidas pertinentes, sino además debe contar con preparación personal sabiendo diferenciar los casos apreciados por su persona. En el Ecuador hemos visto casos controversiales a través de los medios de comunicación en donde parecería que se sentencian a personas únicamente por la presión que la sociedad ejerce sobre los funcionarios de justicia, así mismo por presiones políticas, temores y todo esto hemos observado incluso en delitos de gran magnitud en donde se ven involucradas personas públicas.

3.1.1 MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 519 COIP. - Finalidad. - *La o el juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección previstas en este Código con el fin de:*

- 1. Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal.*
- 2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral.*



3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan elementos de convicción.

4. Garantizar la reparación integral a las víctimas

Al respecto la Constitución política del Ecuador establece:

Art. 87.- Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.

Como he señalado en líneas anteriores en este mismo tema de trabajo, las medidas cautelares deben ser aplicadas acorde a necesidad misma del proceso, sin extremar medidas en donde se podría observar una clara situación de inocencia. Si lo que se pretende con las medidas cautelares es la presencia del procesado al juicio que se inició en su contra, las medidas deben ser dictadas acorde a lo que fija la ley a al sano convencimiento que lleve a las autoridades el imponer o no una y de ser el caso y en último instante imponer la privación de libertad que como dice la ley es una medida excepcional.

Todas estas reglas en las cuales deben basarse el procedimiento para que se dicte una medida cautelar lo que hacen es garantizar los derechos y garantías constitucionales que son inherentes a las personas tanto a las víctimas como a los presuntos victimarios, faculta así mismo al imputado el poder solicitar medidas que no afecten al debido proceso como lo es el procedimiento abreviado.

Las medidas cautelares establecidas en nuestra ley son las siguientes:



Artículo 522 COIP. - Modalidades. - *La o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad:*

A) PROHIBICIÓN DE AUSENTARSE DEL PAIS

Como se señala en la ley la finalidad de las medidas cautelares es el de garantizar y asegurar la presencia de las personas implicadas en un delito dentro del proceso.

El COIP en su artículo 523 establece: *La o el juzgador por pedido de la o el fiscal, podrá disponer el impedimento de salida del país, que se lo notificará a los organismos y autoridades responsables de su cumplimiento, bajo prevenciones legales*

En la tesis realizada por el Dr. Leandro Patricio Vega Chávez señala:

“La prohibición de ausentarse del país, es una medida cautelar sobre la persona que se encuentra estipulada en el Código Integral Penal. Con esta disposición impuesta por la autoridad competente y de igual manera que las demás medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, lo que se intenta evitar, es que, la persona involucrada en el proceso penal se escabulla de la justicia evitando las responsabilidades civiles o penales que se le podrían atribuir en el proceso”⁵¹.

B) OBLIGACIÓN DE PRESENTARSE PERIODICAMENTE ANTE LA AUTORIDAD

Esta medida al igual que la anterior sustituyen a la prisión preventiva, esto por la gravedad y consecuencias del delito por el cual es procesada una persona, esta obligación debe ser cumplida a cabalidad puesto que si una persona no comparece

⁵¹ (Chavez, 2016)



como lo dicto un juez, estaría dando indicios de responsabilidad a mi parecer y su ánimo de no aportar al proceso por el cual le podría generar varias consecuencias como la aplicación de una medida de mayor gravedad como la privación de libertad inclusive. El Código Orgánico Integral Penal establece:

Artículo 524.- Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. - La o el juzgador podrá ordenar al procesado presentarse ante él o ante la autoridad o institución que designe.

El funcionario designado para el control de la presentación periódica ante la autoridad, tendrá la obligación ineludible de informar a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al día previsto para la presentación y de forma inmediata, si ésta no se ha producido, bajo pena de quedar sujeto a las responsabilidades administrativas.

Así mismo en la tesis realizada por el Dr. Leandro Vega previo a la obtención de su título de Abogado en el cantón Riobamba señala:

“Parece que esta norma es más cercana a la realidad del sistema jurídico pues no se tiene que invertir mayores recursos para su adopción y que al ser aplicada e impuesta solo en ciertos delitos que no denoten imprudencia del sistema jurídico, puede llegar a ser de gran ayuda para conllevar un proceso adecuado de la mano con el bienestar del procesado hasta que este sea absuelto o condenado por el hecho que se le asume”⁵².

⁵² (Chavez, 2016)



C) ARRESTO DOMICILIARIO

A criterio personal creo que esta medida debería ser ordenada por el juez competente como manera excepcional ya sea por el estado de salud del procesado, edad avanzada, etc. En la realidad social de las personas que habitamos en este Estado hemos visto que esta medida cautelar es dictada en procesos penales en las que intervienen personas que están ligados a la política y por la injerencia que tienen los mismos en la justicia de este país. Raro es o desconozco que, a una persona común o corriente por así decirlo, se le haya dictado esta medida, pero en delitos de corrupción como hemos podido apreciar en los medios de comunicación son los que se imponen.

El Artículo 525 COIP. - Arresto domiciliario. - El control del arresto domiciliario estará a cargo de la o del juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a través de la Policía Nacional o por cualquier otro medio que establezca. La persona procesada, no estará necesariamente sometida a vigilancia policial permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial periódica y obligatoriamente deberá disponer el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

Al respecto la Abogada Haro Soledispa Lissette Valentina en su tesis previo a la obtención de su título manifiesta:

“El arresto domiciliario sigue apareciendo como una opción para mujeres embarazadas o en puerperio, adultos y adultas mayores, personas que presenten enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y abre la opción a quienes se encuentran



en estos grupos vulnerables y estén perseguidos por delitos de naturaleza sexual o violencia intrafamiliar a mantener la medida en domicilio distinto al de la víctima”⁵³.

D) DISPOSITIVO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA

Al respecto únicamente señalaré que esta medida cautelar es significativamente nueva ya que se estableció en el Código Orgánico Integral Penal, como una medida sustitutiva de otras tales como: la prisión preventiva, arresto domiciliario y demás ya que será de uso obligatorio para quien la porte porque su mal uso o el tratarse de deshacerse del él trae consigo una serie de consecuencias penales ya que se estaría inobservando medidas u órdenes impuestas por autoridad competente.

El Código Orgánico Integral Penal en el numeral 2 del artículo 525 establece que, si bien se puede dictar el arresto domiciliario, este no debe estar sujeta a vigilancia policial necesariamente, sino que podrá pedir el uso de un dispositivo de vigilancia electrónico.

El Abogado Guallichico Chávez Edison Lenin en su tesis previa a la obtención de su título profesional explica:

“Los Dispositivos Electrónicos de Control son todos aquellos artefactos electrónicos que se configuran con la finalidad de brindar la localización de la persona u objeto deseado; en la actualidad existen varias formas de funcionamiento de estos dispositivos, no obstante, consta de 2 partes indispensables, un generador y un receptor. El generador se encarga de enviar la señal que contiene las coordenadas en las cuales se encuentra la persona u objeto, mientras el receptor decodifica la señal

⁵³ (Valentina, 2016)



enviada por el generador y la plasma en un mapa gracias a las coordinadas enviadas”⁵⁴.

El mismo autor concluye al respecto de los dispositivos electrónicos de control:

“La implementación de los dispositivos electrónicos de control, precisando los brazaletes electrónicos, al beneficio de prelibertad reducirá la sobrepoblación penitenciaria debido a que se puede otorgar dicho beneficio de manera más frecuente, toda vez que la vigilancia a los preliberados sería continua, así mismo en el caso de incumplir con las condiciones establecidas en la resolución de concesión de prelibertad la revocatoria sería inmediata así como su recaptura impidiendo que se establezca el estado de prófugo del preliberado”.⁵⁵

E) DETENCIÓN

El código Orgánico Integral Penal establece al respecto Artículo 480 numeral 7.-

*Para evitar la fuga de personas o la extracción de armas, instrumentos, objetos o documentos probatorios y mientras se ordena el allanamiento, la o el fiscal podrá disponer la vigilancia del lugar, la retención de las cosas y solicitar a la o al juzgador la **orden de detención** con fines investigativos para las personas que se encuentren en él.*

Esta medida cautelar es de naturaleza diferente al de la prisión preventiva, esto lo señalo con el fin de evitar en el lector confusiones que se podrían generar, para mejor entender el autor Dr. Armando Bermeo Castillo manifiesta: “La prisión preventiva y la detención en firme, van de la mano en cuanto nos referimos a medidas cautelares de

⁵⁴ (Lenin, 2014)

⁵⁵ (Lenin, 2014)



tipo personal, porque son una limitación al derecho a la libertad deambulatorio de la persona, procediendo en el caso de la primera, cuando existan indicios del acometimiento de un delito de acción penal pública e indicios de la participación del imputado como autor o cómplice, excluyendo en consecuencia al encubridor, y que la pena para ese delito sea superior a un año. Al tratarse de la detención en firme, el juez debe dictar cuando considere que existen presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación del imputado como autor o cómplice, por lo tanto, no procede contra el que se le suponga o presuma encubridor del hecho, e igualmente cuando se trate de un delito cuya pena no exceda de un año”.⁵⁶

En aplicación al trabajo actual la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: *Art. 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, corresponderá en forma privativa a las juezas y jueces de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Cuando el Agente de Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una contravención que implique privación de libertad, podrá requerir inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador para la detención del infractor*⁵⁷.

F) PRISIÓN PREVENTIVA

Nuestra Constitución en primer lugar por ser nuestra norma suprema establece en su art 77 numeral 8 párrafo 2: “La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier

⁵⁶ (Castillo, 2005)

⁵⁷ (Constituyente, 2014)



medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley”⁵⁸.

El Código Orgánico Integral Penal es claro al señalar: “**Artículo 534.- Finalidad y requisitos.** - Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. 2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad”⁵⁹.

Como al estar establecido de forma clara tanto en la Constitución como en la ley, la prisión preventiva debe cumplir con una serie de requisitos para que el agente fiscal

⁵⁸ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2008)

⁵⁹ (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2017)



cuenta con los suficientes elementos de convicción que lo lleven a solicitar, así como al juzgador para dictarlo en contra de una determinada persona. Cabe señalar que en esta medida cautelar a opinión estrictamente personal es en donde más se vulneran los derechos de las personas imputadas por el cometimiento de un delito, la razón de mi opinión va en referencia a que si una vez se confirme la inocencia de una persona a la que se le dicto esta medida, durante el tiempo que estuvo privado de su libertad pudo haber sido víctima de agresiones ya sean físicas, sexuales y demás, en el centro de rehabilitación social de las cuales podría nunca superar todo lo vivido dentro del centro carcelario, todo esto ante la conciencia de que fue inocente siempre. Para evitar todo esto a recomendación, el Estado debería implementar un sistema en donde no se le incluyan a los procesados con las personas que tienen ya una sentencia condenatoria, todo esto con el fin de precautelar los derechos de una persona que podría al finalizar el proceso, confirmarse su inocencia.

4.- ETAPA EVALUATORIA Y PREPARATORIA DE JUICIO

4.1 FINALIDAD

El COIP regula: *Art 601 Tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes.*⁶⁰

⁶⁰ (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2017)



Esta etapa constituye una medida de protección y seguridad jurídica a las personas procesadas ya que, en el Ecuador, hoy en día sería impensable o por lo menos eso creo yo, que previo a sentenciar a una persona, no se revisen cuestiones de procedibilidad que puedan atentar al debido proceso, así también es en donde se podrían analizar cuestiones de legalidad de las pruebas obtenidas por fiscalía y del profesional que defiende al imputado. En esta etapa también se aprueban los acuerdos que pueden llegar las partes cuando se traten de asuntos que se pueden transigir, por ejemplo, en un accidente de tránsito cuando los daños sean únicamente materiales o los físicos reparables. Es en esta audiencia en donde las partes deben poner a conocimiento de las autoridades, de las pruebas que van a reproducir en la audiencia de juicio para que las partes tengan la oportunidad de conocerlas previo a dicho acontecimiento y según se traten, poderse defender de ello con alguna otra prueba.

Las reglas al respecto de este tema están claras al establecer los tiempos dentro de los cuales las respectivas autoridades deben dar trámite o continuidad a un proceso so pena de ser sancionados por el órgano regulador que es el Consejo de la Judicatura quien, al ser notificados de alguna irregularidad de las entidades a su cargo, deberán efectuar las respectivas sanciones, esto para que se eviten o inobserven normas de carácter procesal.

4.2 AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO

4.2.1 ACUSACION FISCAL

En el ensayo realizado por el Dr. Ramiro Salinas Siccha señala: “La acusación es una solicitud fundamentada que realiza el fiscal a la autoridad jurisdiccional por la cual le pide que el caso investigado pase a juicio oral y, por tanto, contiene una especie de promesa en el sentido que el hecho delictivo investigado, así como la responsabilidad penal del imputado



serán acreditados en el juicio oral público y contradictorio, luego que se actúe la prueba por las partes.”⁶¹

Como sabemos, dentro del sinnúmero de clasificaciones que tenemos sobre los delitos encontramos aquellas que se clasifican por el tipo de acción, estas pueden ser de acción penal pública y acción penal privada. La que nos interesa al presente trabajo son las de acción penal publica que son aquellas que a más de perjudicar, herir, atentar a las personas perjudicadas, afecta o altera a la sociedad entera y es por ello mismo que existe la Fiscalía quienes serán los encargados de realizar todas las investigaciones necesarias a fin de que se sancione a una persona que se presume ha cometido un delito, el ordenamiento jurídico le da amplias facultades para realizar y cumplir con sus objetivos, dentro de esas competencias o facultades está el de plantear ante la autoridad judicial competente una denuncia contra cualquier individuo y tratar de que se sancione a la misma,.

Como señale la o el agente fiscal es el órgano encargado de realizar la acusación y para ello debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley de la siguiente manera:

Artículo 603 Código Orgánico Integral Penal.- Acusación fiscal. - La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa: 1. La individualización concreta de la persona o personas acusadas y su grado de participación en la infracción. 2. La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible. 3. Los elementos en los que se funda la acusación. Si son varios los acusados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que participó en la infracción. 4. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa. 5. Anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal sustentará su acusación

⁶¹ (Siccha, 2004)



en el juicio. 6. Si se ofrece rendir prueba de testigos o peritos, se presentará una lista individualizándolos. 7. La solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el momento o su ratificación, revocación o sustitución de aquellas dispuestas con antelación. La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formulación de cargos

En este punto es menester señalar también la trascendencia que tiene la acusación particular que puede darse en el caso que además de la fiscalía, la víctima de un supuesto delito requiera a su parecer de un profesional en Derecho que le asista en dicho procedimiento ya que además es un derecho que está establecido en la ley a favor de la víctima.

Al respecto encontramos su regularización en la ley de la siguiente manera:

Artículo 432 Código Orgánico Integral Penal. - Acusación particular. - Podrá presentar acusación particular: *1. La víctima, por sí misma o a través de su representante legal, sin perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias y de reclamar su derecho a la reparación integral, incluso cuando no presente acusación particular. 2. La víctima, como persona jurídica podrá acusar por medio de su representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante procuradora o procurador judicial. 3. La víctima como entidad u organismo público, podrá acusar por medio de sus representantes legales o de sus delegados especiales y la o el Procurador General del Estado, para las instituciones que carezcan de personería jurídica, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría General del Estado. En la delegación especial deberá constar expresamente el nombre y apellido de la persona procesada y acusada y la relación completa de la infracción con la que se le quiere acusar.*

Esta audiencia como su título lo menciona es de preparación para la posterior audiencia de juicio, en la misma se tratan asuntos de procedibilidad, prejudicialidad, errores formales que



puedan ser subsanados en la misma audiencia a fin de llegar a la audiencia de juicio subsanados todos aquellos errores que puedan influenciar en un proceso, se enumeran los elementos de cargo y de descargo que quieran hacer valer las partes puesto que luego a ello no podrán hacerlo en calidad de pruebas nuevas.

4.2.2 RESOLUCIONES

4.2.2.1 SOBRESEIMIENTO

En el sitio web JUSTICIA DE CERCA podemos encontrar una definición clara de lo que se trata un sobreseimiento pues en ella nos manifiesta que:

“En sentido estricto sobreseimiento en el proceso penal es la resolución judicial que en forma de auto puede dictar el juez después de la fase de instrucción, produciendo la terminación o la suspensión del proceso por faltar los elementos que permitirían la aplicación de la norma penal al caso, de modo que no tiene sentido entrar en la fase de juicio oral. Dicho sobreseimiento puede ser definitivo o provisional y ambos son sujetos del recurso de apelación”⁶²

Nuestro actual Código Orgánico Integral Penal lo regula de la siguiente forma: **Artículo 605.- Sobreseimiento.** - *La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos: 1. Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión sea ratificada por el superior. 2. Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona procesada. 3. Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la antijuridicidad.*

⁶² (JUSTICIA DE CERCA, 2017)



4.2.2.2 LLAMAMIENTO A JUICIO

Contrario al sobreseimiento, en donde el proceso se archiva o cierra por no contar con los elementos de convicción suficientes para procesar a una persona, o cuando dicho acto por el cual es investigado no se considera delito, encontramos al llamamiento a juicio en donde el juez competente continuará con la sustanciación del proceso una vez cumplidas todas las formalidades o legalidades del caso, en donde el juez cierra la etapa intermedia del proceso, dejando que el futuro de la persona imputada a un delito se defina en el juicio oral ante otro juez del mismo nivel pues el procedimiento se ha llevado de una manera correcta y en apego a los principios y normas de cada proceso y sobretodo lo más importante que el proceso cuenta con los elementos de convicción suficientes o necesarios para procesar a una persona , el agente fiscal ha logrado determinar el delito así como los autores o cómplices del mismo y en donde se pueda ver involucrada una persona.

Punto importante dentro del presente tema es el manifestar que, y aquí entra en aplicación la resolución 09 del año 2016, una vez dictado el auto de llamamiento a juicio por un juzgador, dicho proceso pasa mediante resorteo de la causa, a otro juez del mismo nivel quien será el encargado de resolver la situación del procesado en audiencia pública: el juez que dictó el auto de llamamiento a juicio pierde total competencia puesto que, ya no podrá conocer del proceso en adelante. En este aspecto y en consideración a varios aspectos de la administración de justicia referido a la seguridad jurídica, el nuevo juez que conoce la causa, ya no estaría contaminado para de alguna manera perjudicar el adecuado procedimiento de la causa.

Artículo 608 Código Orgánico Integral Penal. (COIP) - Llamamiento a juicio. - La resolución motivada de llamamiento a juicio incluirá: 1. La identificación del o los procesados. 2. La determinación del o los hechos y el delito acusado por la o el fiscal, así



como el grado de participación establecido en la acusación fiscal, la especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y pertinencia de las normas legales y constitucionales aplicables. 3. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el momento o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las mismas, dispuestas con antelación. 4. Los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y aprobados por la o el juzgador. 5. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables en el juicio. 6. El acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos probatorios, son los únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto a la o al fiscal.

5. ETAPA DE JUICIO EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO Y CONOCIDA POR DIFERENTE JUZGADOR MEDIANTE NUEVO SORTEO

Es en esta etapa, en la audiencia de juicio, en donde se definirá el futuro de la persona procesada por un delito, es el resultado de la obtención de elementos de convicción los mismos que en esta etapa se transforman en pruebas de parte de la fiscalía, así como también las obtenidas por el defensor público o el defensor privado de ser el caso. En ella se verán reflejados todas las actividades realizadas tanto por una como por la otra parte con el fin de probar sus aseveraciones.

Esta es la etapa de mayor trascendencia en los delitos de tránsito y en lo que al tema de investigación se refiere porque es en la audiencia de juicio en donde se decidirá sobre la responsabilidad o no de una persona, bien para confirmar su inocencia, como para demostrar su responsabilidad e imponerle alguna de las sanciones establecidas para cada delito en nuestro ordenamiento jurídico. El juez deberá dictar su sentencia de manera motivada, en apego estricto a las normas, principios, etc. Que le sirvan para tomar una decisión y esa



decisión deberá ser justa y legal para no atentar contra la seguridad jurídica del Estado mismo, puesto que, con la resolución 09-2016 son los objetivos de la administración de justicia.

A si mismo resalto la importancia del presente tema puesto que a más de ser el punto fijo en donde se basa el trabajo de investigación, con la resolución 09-2016 de la Corte Nacional de Justicia surge un cambio respecto a la competencia para poder conocer del proceso en su etapa de juicio radica en otro juez de igual nivel, unipersonal a diferencia de los demás tipos penales en donde la conocen los tribunales penales pluripersonales

Artículo 615.- Práctica de pruebas. - La o el presidente del tribunal procederá de conformidad con las siguientes reglas: 1. Después del alegato de apertura, ordenará la práctica de las pruebas solicitadas por la o el fiscal, la víctima y la defensa pública o privada. 2. Durante la audiencia, las personas que actúan como peritos y testigos deberán prestar juramento de decir la verdad y ser interrogadas personalmente o a través de sistemas telemáticos. 3. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores versiones, declaraciones u otros documentos que las contengan, salvo el caso de prueba anticipada. La declaración de los testigos se sujetará al interrogatorio y contrainterrogatorio de los sujetos procesales. 4. Las versiones e informes del personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, del personal competente en materia de tránsito, de los peritos y otras declaraciones previas se utilizarán en el interrogatorio y contrainterrogatorios con el fin de recordar sus actuaciones. 5. Los peritos deberán exponer el contenido y las conclusiones de su informe y a continuación se autorizará a interrogarlos. Los interrogatorios serán realizados primero por la parte que ha ofrecido esa prueba y luego por las restantes. 6. Si en el juicio intervienen como acusadores la o el fiscal y la o el defensor público o privado que representa a la víctima o el mismo se realiza contra dos o más personas procesadas, se concederá



sucesivamente la palabra a todos las y los acusadores o a todas las personas acusadas, según corresponda. 7. El tribunal podrá formular preguntas al testigo o perito con el único fin de aclarar sus testimonios. 8. Antes de declarar, las y los peritos y testigos no podrán comunicarse entre sí ni ver ni oír ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia.

Las pruebas son la base mismo de un proceso puesto que en base a ellas está llamado el juez a imponer una sentencia condenatoria o a ratificar un estado de inocencia, como en cierta ocasión en palabras de un profesor de la universidad decía “Las pruebas son el corazón de un proceso” de ellas dependerá si se aplica o no una justicia verdadera, en la actualidad diferente a los tipos de procesos establecidos en el derogado Código de Procedimiento Penal y Código Penal en donde poco faltaba a que se llegue a sancionar a una persona por la cantidad de pruebas que se presenten en su contra o por la cantidad de testimonios que así mismo se llegaban a dar en las audiencias de juzgamiento. Ahora bastaría inclusive una prueba, pero con tal veracidad que no deje lugar a dudas sobre la responsabilidad de una persona para poderlo juzgar, ya no se sentencia en base a la cantidad de pruebas sino a la calidad de las mismas.

Artículo 621.- Sentencia. - *Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos. El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de diez días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se pueden interponer los recursos expresamente previstos en este Código y la Constitución de la República.*



Todo este trámite constituye la fase procesal que será producto de las investigaciones previas realizadas por la FGE, pues de no haber indicios de responsabilidad no se avanzaría hasta este punto, todo en Derecho se encuentra relacionado en busca de la aplicación de justicia.

Respecto a todo el capítulo estudiado únicamente cabe señalar que de no cumplirse con cada uno de los parámetros establecidos de manera obligatoria en la ley, nos encontraremos a un proceso jurídicamente inválido ya que la inobservancia ya sea a una sola de ellas acarrea la nulidad de todo lo actuado o incluso de todo el proceso, para ello es importante y la justicia requiere de profesionales formados y especializados en cada una de las ramas que el derecho necesita para poder llevar este tipo de asunto, tanto un juez para poder sancionar, así como también de un agente fiscal o un abogado para poder ejercer la acción penal respectiva.

En la actualidad y como se vio también en épocas pasadas, se han cometido una serie de irregularidades en los procesos y no solo de tránsito que es el tema de mi trabajo, sino en delitos de gran magnitud como homicidios, violaciones, en fin delitos en contra de la vida que han generado una serie de controversias a nivel social que como sabemos no juzga con la razón sino con los sentimientos.

Cabe señalar así mismo que las maneras de calificación actual de las autoridades encargadas de administrar justicia se han inclinado únicamente a revisar la cantidad de casos sentenciados con condena, fiscales calificados por la cantidad de casos en las cuales han logrado una sentencia condenatoria. Todo esto a mi parecer es una presión social, un tipo de incitación a las autoridades a sentenciar a una persona incluso inobservando la ley misma.



CAPÍTULO 3

CAMBIOS SOBRESALIENTES EN EL PROCESO PENAL EN LOS DELITOS DE TRÁNSITO LUEGO DE LAS RESOLUCIONES.

Con la expedición de las resoluciones 176-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura y la 09-2016 de la Corte Nacional de Justicia se han producido algunas reformas en nuestro ordenamiento jurídico en relación al tema que nos atañe el presente trabajo esto es, la manera de llevarse a cabo el proceso y el procedimiento en los delitos de tránsito a consideración personal de manera positiva, pero para esta afirmación realizaré un análisis a fondo del contenido de las dos resoluciones para poder fundamentar de manera adecuada la anterior aseveración.

A través de la historia en nuestro país se ha demostrado que la promulgación de las normas con el paso del tiempo y de su vigencia van generando conflictos a la hora de la aplicación ya sean por existir contradicción entre ellas, por los vacíos legales que suelen generar o por los operadores de justicia que no encuentran la solución a un conflicto que no está claramente tipificado en la ley; surge entonces, a consideración de los profesionales en Derecho que se encuentran día a día al frente de estas situaciones, la necesidad de consultar a las más altas autoridades sobre la manera adecuada o correcta para su subsanación. La manera de respuesta a las consultas se las realiza con las Resoluciones dictadas por los organismos de justicia encargadas de ello ya sean: La Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, El Pleno del Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional, El Ejecutivo, etc.

Si bien la promulgación de las normas se las realiza con el fin de beneficiar a la sociedad, importante es manifestar a título personal que las personas encargadas de su creación deben considerar las circunstancias mínimas que regulará a futuro la norma a fin de evitar y



como se observa actualmente el sobrecargo de normas con la que se encuentra nuestro país, así mismo de la cantidad de reformas que se han expedido en diferentes materias.

Las resoluciones que serán objeto de estudio regulan la forma y los organismos encargados o competentes en sustanciar los procesos en los delitos de tránsito con el fin de evitar transgredir los derechos de las personas procesadas que se podrían ver reflejadas en asuntos tales como: incompetencia del órgano encargado de administrar justicia, métodos inadecuados para su ventilación, normas contradictorias en cada una de las etapas del proceso, vacíos legales, etc. Dicho análisis servirá como base para las conclusiones que se buscan con este trabajo a fin de saber si las reformas han beneficiado o no a la sociedad en general y al justiciable en concreto, puesto que el mayor interesado en este tipo de procedimientos será la persona procesada por un delito de tránsito, para de esta forma poder dar una conclusión si en efecto se han beneficiado, cuentan con la garantía de seguridad jurídica o su situación se ha agravado con la forma de realizarse el procedimiento es decir, en conclusión si el nuevo procedimiento bajo las actuales disposiciones respecto de las competencias son efectivas o no.

1.- ANÁLISIS. - RESOLUCIÓN 176-2014 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

1.1.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

La resolución expedida en materia de tránsito la emite el Pleno del Consejo de la Judicatura, para ello es menester conocer si esta entre sus atribuciones o facultades el poderlo realizar porque caso contrario sería completamente inválida dicha resolución.

La Constitución Política del Ecuador del año 2008 establece:



Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, (...)

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley. La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial. La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.

Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley:

- 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.*
- 2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.*
- 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.*
- 4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial.*
- 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple.*

En conclusión, de las normas que me he permitido transcribir se observa que dentro de las facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura está el de velar por la correcta administración de justicia y entre ellas el expedir resoluciones con ese objetivo, para ello cuenta con el apoyo de otras entidades judiciales para el cumplimiento de todas sus actividades. Dichas decisiones



al ser de aplicación pública para todo el estado ecuatoriano son inscritas y su vigencia corre a partir de su promulgación en el Registro Oficial que es donde se inscriben y publican todos los mandatos legales en todas y cada una de las materias y de todas las entidades competentes que tienen la facultad de expedir, derogar y reformar normas.

1.2.- CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 176-2014 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Entendidas las atribuciones del Consejo de la Judicatura y los fundamentos constitucionales para poder crear y suprimir órganos de administración, a continuación, se analizará detalladamente cada una de las reformas que trae consigo dicha resolución:

1.2.1.- CREACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY

En la lista de facultades con las que se encuentra atribuida dicha institución, está el de velar por la correcta administración de justicia en el momento que consideren necesario y fundamentadamente podrá, con el fin de cumplir sus objetivos, crear organismos para de esta manera asegurar o dirigir sus actividades a una materia concreta y por ello es la misma institución que ha visto la necesidad de la aparición de la Unidad Judicial Penal en Cuenca ya que a consideración personal las instituciones existentes en ese tiempo no eran las suficientes o las competentes para conocer los delitos de tránsito, para ello debió en primer momento existir la necesidad de la existencia de dicha entidad para luego dar paso al análisis de su creación.

Al respecto el Código Orgánico de la Función Judicial al tratar sobre las funciones en específico del Pleno establece:



Art. 264.- FUNCIONES. - Al Pleno le corresponde: (...)

8. En cualquier tiempo, de acuerdo con las necesidades del servicio de la Función Judicial:

a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente. b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel, excepto la competencia en razón del fuero. Una misma sala o juzgador de primer nivel, podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias competencias. c) En caso de que, del informe técnico correspondiente, aparezca que existe en forma transitoria en determinada rama de la actividad judicial o en una localidad un número muy alto de causas sin despacho, podrá crear salas o juzgados temporales que funcionarán por el periodo de tiempo que señalará o hasta que se despachen las causas acumuladas; en estos casos se procederá al nuevo sorteo de causas para asignarlas a estas salas o juzgados temporales; y, d) Crear, modificar o suprimir direcciones regionales o provinciales, las cuales funcionarán de forma desconcentrada.

1.2.1.1.-CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS DE LA RESOLUCIÓN 176-2014 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

ARTÍCULO 1.- Crear la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca, integrada por jueces y juezas nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.



La creación de la nueva entidad de justicia quedo clara pues fue analizada en líneas anteriores, pero al respecto de las personas profesionales que fueron nombradas en ese instante no considero lo más correcto, coherente o legal incluso la forma de hacerlo ya que una persona profesional en Derecho para poder ser parte de un organismo tan importante como es el de administrar justicia debe demostrar probidad, conocimientos para sustanciar, dictar sentencias, etc. Esto no lo menciono de forma deliberada puesto que el fundamento de mis aseveraciones las encontramos en el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, por lo tanto, es en la misma resolución en donde ya encontramos contradicciones o solo de que se trate de un nombramiento posterior a un concurso en donde dicha situación varía. Al respecto nuestro Código Orgánico de la Función Judicial establece:

Art. 52.- INGRESO A LA FUNCION JUDICIAL. - *“Todo ingreso de personal a la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres; a través de los procedimientos establecidos en este Código. El ingreso a las carreras de la Función Judicial se hará a la categoría uno, salvo los casos en que la Constitución y la ley permiten el ingreso a distinta categoría. Las promociones de categoría en las carreras de la Función Judicial se realizarán en función a los resultados de la evaluación y rendición de las pruebas de conocimientos, prácticas y psicológicas”*⁶³.

ARTICULO 2.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca, serán competentes en razón del territorio para este cantón.

Al respecto el mismo código Orgánico de la Función Judicial establece en su contenido lo siguiente:

⁶³ (publicaciones, 2009)



Art. 156.- COMPETENCIA. - *Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, **del territorio**, de la materia, y de los grados.*

Resulta ser necesario en la actualidad la creación de Unidades Judiciales y no solo penales sino en todas las ramas del Derecho esto, con el fin de que existan salas especializadas en cada ámbito para de esta manera agilizar los tramites, extinguir el sobrecargo de proceso puestos a conocimiento de las sales antes existentes, de una u otra manera es una forma de brindar seguridad jurídica de que los asuntos de cada rama lo están conociendo personas profesionales especializados en el tema y así evitar los jueces multicompetentes y unipersonales que aún existen en varios lugares del país, en los cantones por ejemplo esta situación no varía, existen juzgadores que conocen de varios tipos de delitos y no quiero con esto decir que estén obrando de manera inadecuada sino más bien a raíz de esta situación recalcar la importancia y la necesidad que existe en contar un Complejo Judicial con jueces especializados en cada materia para poder ser competentes en sus diferentes ámbitos. Si bien con esta resolución lo que se crea son las Unidades Penales en el cantón Cuenca, pero se les dota de muchas competencias a un mismo juez.

El crecimiento continuo de la población ecuatoriana, el tipo de delitos que se cometen a diario, la necesidad de seguridad jurídica al momento de acceder a la administración de justicia, el sobrecargo de procesos de las salas multicompetentes entre otros, son los motivos y razones suficientes para que los organismos de control de la Función Judicial realicen mesas de debates y análisis con el fin de mejorar y precautelar los derechos de las personas y así mismo avanzar como sociedad buscando siempre el beneficio o bien común que es lo que en general es el fin mismo de la justicia.



ARTICULO 3.- Las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

- 1) Penal, de acuerdo lo determinado en el artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las disposiciones determinadas en el Código Orgánico Integral Penal.**

De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal son las siguientes:

***Art. 225.- Competencia.** - Las y los jueces de garantías penales, además de las competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral Penal, son competentes para: 1. Garantizar los derechos de la persona procesada y de la víctima durante las etapas procesales, conforme con las facultades y deberes que le otorga la ley. 2. Ordenar y practicar los actos probatorios urgentes que requieran autorización. 3. Dictar las medidas cautelares y de protección. 4. Sustanciar y resolver los procedimientos de ejercicio privado de la acción penal. 5. Sustanciar y resolver los procedimientos abreviados y directos. 6. Sustanciar y resolver las causas en todos aquellos procesos de ejercicio público de la acción penal que determine la ley. 7. Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en el juzgamiento de infracciones contra la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 8. Los demás casos que determine la ley.*

Es obvio que en primer instante la creación de las Unidades Judiciales Penales, los mismos sean los competentes de conocer esta materia, los delitos concernientes a esta rama del Derecho. Si una de las facultades o atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura es velar por la correcta administración de justicia, serán sus miembros los encargados así mismo de conceder las competencias a cada una de las instituciones al momento de crearlas con el fin de cumplir sus objetivos.



- 2) Contravencional, conforme lo determinado en los numerales 2, 3, 4 y 6 del artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal.**

Si las facultades, como lo indica dicho numeral, está el de conocer materia contravencional, acoplaré a continuación los numerales mencionados:

Art. 231.- Competencia de las juezas y los jueces de contravenciones. - *En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de contravenciones que fije el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia. En caso de no establecerse esta determinación, se entenderá que es cantonal. Serán competentes para:*

- 2. Conocer las contravenciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal.*
- 3. Conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.*
- 4. Conocer las diligencias pre procesales de prueba material en materia penal y civil, la notificación de los protestos de cheques y la realización de actuaciones procesales que le sean deprecadas o comisionadas*
- 6. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley*

Las diferentes facultades atribuidas a la Unidad Judicial Penal en Cuenca a percepción personal, disminuyo varios conflictos existentes a razón de conocer en primer momento y desde el inicio del conocimiento de una causa, tener entendido de manera estricta en donde se llevarán a cabo las causas ingresadas tanto por la FGE, así como también las denuncias ingresadas a título personal.



3) Tránsito, delitos y contravenciones, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.

Los tipos de materias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial son las siguientes:

Art. 229.- competencia de las juezas y los jueces de tránsito. - Son competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencia, según sea el caso, en los procesos por infracciones de tránsito de acuerdo a la ley de la materia.

La resolución otorga competencia a los jueces de la Unidad Judicial Penal creada a conocer tanto delitos como contravenciones de tránsito que como sabemos son dos tipos de infracciones en este tipo de materia. Así mismo confiere competencia en razón de las normas contenidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (LOTTTSV) y el Reglamento a la (LOTTTSV) esto por razones de coherencia y además como las normas en el ordenamiento jurídico deben guardar relación entre ellas, son de utilidad para poder conocer la manera de actuar al frente de cada uno de los delitos cometidos por las personas involucradas en un asunto de Transito.

4) Garantías Penitenciarias, conforme lo determina el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal.

Art. 230.- Competencia de las juezas y jueces de garantías penitenciarias. - En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de



garantías penitenciarias. Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria, en las siguientes situaciones jurídicas: 1. Todas las garantías jurisdiccionales, salvo la acción extraordinaria de protección. 2. Resolver las impugnaciones de cualquier decisión emanada de la autoridad competente relativas al régimen penitenciario. 3. Conocer y sustanciar los procesos relativos al otorgamiento de los regímenes semiabierto y abierto. 4. Las resoluciones que concedan la inmediata excarcelación por cumplimiento de la pena. 5. La unificación y prescripción de las penas emanadas por la administración de justicia penal, tanto nacional como extranjera. 6. Controlar el cumplimiento y la ejecución del indulto presidencial o parlamentario 7. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en lo que corresponde. 8. Las violaciones al estatus de liberado de las personas que han cumplido la pena y cualquier discriminación por pasado judicial de estas personas(..).

Esta rama del Derecho no es nueva puesto que dese normas anteriores a la resolución establecían las competencias de los jueces en materia de garantías penitenciarias, lo que la resolución hace es dotar de esta competencia a las Unidades Penales creadas por la necesidad obvia por el hecho de existir un Centro de Rehabilitación Social en Turi, donde se ventilaran procesos en donde se encuentren involucrados personas privadas de la libertad, las mismas que aun teniendo esa condición no dejan de contar con derechos como cualquier persona.



5) Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el título III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional.

Lo que dispone la Constitución Política del Ecuador del año 2008 en su título tercero es que todos los jueces en todas las materias a nivel nacional son competentes para conocer, sustanciar y resolver asuntos de materia constitucional en donde se encuentren involucrados derechos garantizados por la Carta Suprema, acciones a las que tiene acceso toda persona tales como: acción de habeas Corpus, Habeas Data, Derecho al libre acceso a la información pública, etc. Todo juez es competente para conocer acciones Constitucionales.

ARTICULO 4.- Suprimir los juzgados Primero, Segundo, y Tercero de Garantías Penales, Juzgados Primero, Primero Adjunto, Segundo y Segundo Adjunto de Transito, con sede en el cantón Cuenca; Unidad Judicial de Contravenciones del cantón Cuenca; Juzgado de Contravenciones especializado contra la comercialización ilegal de mercancías del Azuay.

Este tema es de superior interés pues es una de las atribuciones del Consejo de la Judicatura el poder suprimir, fusionar, eliminar diferentes juzgados, tribunales y demás organismos de justicia en cualquier parte del país para la salvaguarda de una mejor y adecuada administración de justicia en donde se elimine el sobrecargo de procesos a una sola Unidad Penal o la falta de las mismas.

Lo que se debe tomar en consideración es de si crear Unidades Penales involucra el hecho de eliminar otras ya que las mismas podrían seguir realizando sus funciones pero en ramas especializadas del Derecho, con estas situaciones en veces suele traer consigo ciertos



conflictos en asuntos laborales de las personas que prestan sus servicios en estas entidades y para ello es la misma resolución la que brinda las soluciones a ello, pues en sus líneas siguientes establece de cómo se manejarán en adelante el personal administrativo y de justicia a fin de evitar el desempleo de una manera directa y repentina, pues con ello se estaría así mismo perjudicando los derechos de las personas que se encontraban laborando en dichas instituciones, la resolución evita la creación de estas situaciones.

ARTICULO 5.- Las juezas y jueces que prestan sus servicios en los juzgados Primero, Segundo y Tercero de Garantías Penales, Juzgados Primero, Primero Adjunto, Segundo y Segundo Adjunto de Transito, con sede en el cantón Cuenca; Unidad Judicial de Contravenciones del cantón Cuenca; Juzgado de Contravenciones especializado contra la comercialización ilegal de mercancías del Azuay, pasaran a ser juezas y jueces de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca, quienes seguirán conociendo y resolviendo las causas en las cuales avocaron conocimiento.

Esta normativa guarda relación con las leyes que protegen a los trabajadores en sus diferentes ámbitos, más aún en el sector público, leyes abarcadas tanto en el Código de Trabajo, así como la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en donde no se puede perjudicar de ninguna manera el ámbito laboral y los derechos de las personas. Es en esta misma norma (LOSEP) en donde se encuentran establecidos los derechos incluso irrenunciables de las personas que trabajan en el sector público y todo lo relacionado con sus funciones, manera de ingreso, situación laboral en caso de cambios en la norma, etc. Al respecto se puede realizar la lectura del artículo 23 para mejor entendimiento.



ARTICULO 6.- El ingreso de nuevas causas, serán asignadas mediante sorteo a las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca.

La misma resolución otorga a los jueces que ya conocieron y en donde se estaban ventilando los diferentes procesos, la facultad de continuar haciéndolo hasta la etapa final de dictar sentencia, así mismo esta reforma concede facultades y competencias a la Unidad Judicial Penal creada en donde las nuevas causas que llegarán a su conocimiento se realizan bajo el sistema de sorteo, sistema utilizado hasta la actualidad y que considero es el adecuado ya que sería la forma más imparcial de distribuir las causas que ingresan a diario, sabiendo claro que el juez conocedor del proceso debe sustanciarlo con imparcialidad o excusarse del mismo cuando existan intereses de por medio.

Al respecto el Código Orgánico de la Función Judicial establece:

Art. 160.- MODOS DE PREVENCIÓN. - 1. *En todas las causas, la prevención se produce por sorteo en aquellos lugares donde haya pluralidad de juzgados, o por la fecha de presentación de la demanda, cuando exista un solo juzgador (...).*

Como señalé este es el sistema utilizado ya por varios años atrás, no es nuevo, esto no sucede únicamente en la materia penal, sino en otras materias como la civil, familia, constitucional, etc.

ARTÍCULO 7.- Las servidoras y servidores administrativos que prestan sus servicios en los juzgados Primero, Segundo y Tercero de Garantías Penales; Juzgados Primero, Primero Adjunto, Segundo y Segundo Adjunto de Transito, con sede en el cantón Cuenca; Unidad Judicial de Contravenciones del cantón Cuenca; Juzgado de Contravenciones especializado contra la comercialización ilegal de mercancías del



Azuay, pasaran a prestar sus servicios en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca, quienes deberán sujetarse a las disposiciones administrativas que emitan la Dirección Provincial de Azuay y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

Situación similar ocurre con las personas que trabajaban en el área administrativa de los organismos de justicia suprimidos con la presente resolución, las personas que prestaban sus servicios en el área administrativa, quedaron bajo orden y administración del área de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

Es el mismo COFJ la norma encargada de la regulación de este tema:

Art. 261.- ESTRUCTURA FUNCIONAL.- (...) *Las unidades administrativas necesarias, cuya creación, organización, funciones, responsabilidades y control establecen y regulan este Código y el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, según corresponda, se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, la transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión.*

ARTICULO 8.- Las servidoras y servidores judiciales que integran la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Cuenca, laborarán en el horario establecido por el Consejo de la Judicatura; no obstante, en días y horas no laborables, ejercerán su función cuando las necesidades del servicio así lo requieran mediante turnos rotativos.

El horario establecido por el Consejo de la Judicatura es de 08:00 horas hasta las 17:00 horas, en cuestiones administrativas, pero así mismo y con mucha lógica la norma establece que en días no laborables se mantenga un orden de turnos rotativos por la necesidad de administración de justicia ya que en delitos flagrantes y esto es su naturaleza, en los días



sábados y domingos las deberán conocer las entidades de turnos por la emergencia misma de pasar la audiencia en donde se establecen medidas cautelares en contra de una persona encontrada o sorprendida en delitos de este tipo. Así mismo diferentes entidades públicas involucradas de una u otra manera a la administración de justicia, cumplen con este sistema así, por ejemplo: La Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Juzgados de diferentes materias, etc. Que intervienen en diferentes etapas de un proceso que tiene como fin una sentencia, la FGE encargada de realizar las investigaciones previas y formular cargos, la Policía Nacional encargada de la seguridad de los ciudadanos, los Jueces y juezas en su actividad de administrar justicia.

2.- ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN 09-2016 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

2.1.- ANTECEDENTES

Dicha resolución surge a raíz de varias consultas de altos funcionarios de diferentes cortes tanto provinciales como de primer nivel de diferentes provincias del país, así por ejemplo la primera razón dentro del antecedente esta la consulta extendida a los miembros de la Corte Nacional por parte del Doctor Javier de la Cadena Correa en ese entonces Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura de la siguiente manera:

Juzgamiento de los delitos de tránsito. - Con la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, se establece la derogatoria décimo octava, que hace lo propio con varios artículos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en donde se reglaba el procedimiento para los delitos de tránsito quedando vigente el art. 147 que hace referencia a la competencia de los jueces de tránsito para el juzgamiento de los delitos de tránsito. Con este antecedente, realizada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de un delito de



tránsito, ¿en qué momento deberá convocarse a la audiencia de juicio? la misma deberá realizarse ante el mismo juez que dicta el auto de llamamiento a juicio?

Así mismo la Jueza de la Unidad de Tránsito de Quito, Dra. Alba Paladines Salvador realiza una consulta a la Corte Nacional de Justicia en el siguiente sentido:

En los delitos de tránsito que se tramitan a través de Procedimiento Ordinario, ¿son competentes para conocer la etapa de juicio los jueces de tránsito de primera instancia que conocen de la causa desde el inicio del proceso penal, debiendo inclusive pronunciarse sobre la causa al emitir el auto de llamamiento a juicio, o en su defecto los Tribunales Penales en aplicación del criterio funcional de competencia contenido en el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal?

El Juez Provincial de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Dr. Carlos Figueroa Aguirre consulta:

A fin de unificar criterios jurídicos tendientes a aplicar correctamente las normas procesales penales, amerita se dilucide respecto a la pertinencia o no de que obligatoriamente un Juez de Tránsito, distinto al que dictó el auto de llamamiento a juicio, conozca del juzgamiento.

Un colegiado de Juzgadores de Machala ponen a consideración del mismo organismo un criterio unificado a fin de poner una solución al conflicto que existía en ese entonces de la siguiente manera:

A nuestro criterio el juez de instancia, debe sustanciar el proceso únicamente hasta la etapa intermedia, y emitir un Auto de llamamiento a juicio motivado; correspondiéndole a otro juez por sorteo, de igual nivel conocer la etapa de juzgamiento, a efectos de garantizarles a las partes, una verdadera tutela judicial efectiva, cómo lo prevé el artículo 75 de la Constitución



del Ecuador y se respeten los principios de seguridad jurídica, e imparcialidad. Al momento de dictar auto de llamamiento a juicio, el juzgador está emitiendo un criterio sobre la causa, entonces el juzgador pierde la imparcialidad pues en la audiencia de juzgamiento, va a valorar los mismos elementos de convicción, pero ya convertidos en prueba, obiter dicta, está contaminado.

Dichas consultas y consideraciones particulares y de diferentes grupos de profesionales se pusieron a conocimiento del Presidente de la Corte Nacional de Justicia de ese entonces. Estas situaciones ingresaron a debate para su análisis y posterior reforma mediante resolución 09-2016, buscando dar solución a dichas dudas por los inconvenientes que se presentaban en los lugares que existen Unidades Penales que no tenían claro en la forma correcta de conocer un proceso para un delito de tránsito para llegar a una sentencia que sea considerada eficaz, imparcial, justa, etc.

La imparcialidad al momento de conocer, ventilar y sentenciar un proceso como en cualquier materia es condición indispensable en la administración de justicia en general y en nuestro tema (tránsito) en especial ya que con el sistema anterior lo que se generaba eran conflictos en donde no se contaba con la seguridad jurídica de si una sentencia y por lo tanto la situación jurídica del procesado fue dictada con apego estricto a la norma respecto de los derechos de cada una de las partes intervinientes, si las pruebas fueron valoradas de manera que no se violen formalidades intrínsecas, esto con el fin de evitar subjetividades a la hora de emitir la decisión del juzgador.

2.2.- COMPETENCIA DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, le corresponde determinar la adecuada aplicación de la ley consultada aclarando las circunstancias de duda puestas a su conocimiento; el



artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: “6. Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial;

Dentro de las varias competencias con las que cuentan la Corte Nacional de Justicia está el de expedir resoluciones, esto con el objeto de establecer claridad en caso de contradicción, oscuridad de la norma, su manera de aplicación, etc. Todo relacionado a la seguridad jurídica que debe brindar el Estado a las personas que de una u otra manera se pueden ver involucrados en este tipo de asuntos jurídicos y que requieren, claro está, que cuenten con la seguridad de que dichos procedimientos se estén llevando de manera adecuada respetando sus derechos constitucionales y que se cumplan cada uno de los parámetros propios de cada proceso

2.3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Referente el tema, a continuación, presento un breve análisis de los motivos que fueron fundamento para la expedición de la resolución que es objeto de investigación del presente trabajo, varios de ellos referente a las normas constitucionales que son la base de cualquier ordenamiento jurídico que rige en este Estado.

La Constitución Política del Ecuador del año 2008 en varios de sus artículos establece que nuestro Estado es de Derechos y justicia y que su más alto deber u obligación es velar por que se respeten y respetar los derechos humanos, garantizar los derechos de todas las personas y para ello cuenta con diferentes órganos encargados en cumplir sus objetivos a través de sus competencias. Al respecto al sistema penal establece que es un medio para la correcta administración de justicia en donde se garantiza el principio de mínima intervención penal.



La constitución del Ecuador fue creada con los objetivos de garantizar los derechos humanos de todos quienes conformamos el Estado ecuatoriano, y dentro de toda esta gama de derechos se encuentran ciertos especificados en su contenido tales son: Derecho al Debido proceso penal, Derecho a la defensa, derecho a la seguridad jurídica, etc.

Dentro del derecho al debido proceso penal se encuentra el derecho a la defensa, en donde se garantiza el cumplimiento de los derechos establecidos para todas las personas, puesto que en ningún sentido una persona puede ser juzgado sin una defensa sea pública o privada, más bien esta situación desembocaría en la nulidad de todo el proceso. El derecho a la defensa al ser el derecho genérico dentro de los derechos al debido proceso es de vital trascendencia para poder establecer si se cumplen o no los derechos en el Ecuador.

Al referir al derecho a la defensa dicha garantía se encuentra así mismo establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, El Estatuto del Juez Iberoamericano, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. de los cuales nuestro estado es parte y debe aplicarlos en su ordenamiento interno, así mismo se han considerado asuntos específicos al respecto como jurisprudencia internacional como nacional, Autores Internacionales y nacionales, Ordenamiento jurídico estatal.

2.4.- PROBLEMA SUSCITADO CON LA NORMATIVA VIGENTE HASTA ANTES DE LA RESOLUCIÓN 09-2016 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

En la normativa vigente hasta ese entonces y respecto a los delitos de tránsito y de su manera de tramitación para sancionarlos se encontraban establecidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial con la audiencia de Formulación de Cargos en primer lugar con la que se daba inicio a la Instrucción Fiscal que variaba dependiendo de si



se trataba de un delito flagrante o no , concluida la instrucción el fiscal debía presentar su dictamen acusatorio o abstentivo, y en caso de ser acusatorio, el juez convocaba a la audiencia de juzgamiento en donde se dictaba sentencia, para todo esto era competente un juez unipersonal.

Con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal se derogaron algunas normas establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en especial referidas a las infracciones de tránsito y de su tramitación. El Código Orgánico Integral Penal abarcó este tipo de delitos en su contenido, pero, no establecía un trámite o procedimiento especial para su respectivo juzgamiento. Así mismo en su contenido clasifica a las infracciones de tránsito como Delitos y Contravenciones, no encontrándose a los delitos de tránsito dentro de la acción penal privado, entonces estos pertenecerían a los delitos de acción penal público.

Así mismo el COIP establece los diferentes tipos de procedimientos en el ámbito penal así señala al procedimiento Ordinario a los especiales tales como: Procedimiento Abreviado, Directo, Expedito, y procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. Ahora bien, para el ejercicio de la acción penal publico existen claramente especificados el procedimiento Ordinario y el Directo.

2.5.- CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 09-2016 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

ARTICULO 1.- Cuando se deba juzgar un delito de ejercicio público de la acción contemplado en el Capítulo Octavo, Título IV, Libro Primero del Código Orgánico Integral Penal, que trata de las infracciones de tránsito, y el mismo sea calificado como flagrante y la pena privativa de libertad prevista para el tipo penal no sea superior a



cinco años, será competente para conocer todo el proceso hasta dictar la sentencia que corresponda, la Jueza o el Juez de Transito legalmente designado.

Este artículo creado con el fin de solucionar el conflicto existente en esas fechas que trataba en específico sobre la competencia de los diferentes juzgadores para conocer las infracciones de tránsito sean delitos o contravenciones, el contenido de la reforma es clara y aplica el procedimiento directo, que fue objeto de análisis y que fue una de las problemáticas para el estudio de la conveniencia de dicha resolución, a todos esos delitos calificados como flagrantes y cuya pena máxima no sea superior a cinco años, dando a entender entonces que para el juzgamiento de las demás infracciones existe otro tipo de procedimiento para tramitar estos procesos.

ARTICULO 2.- En los demás casos que no se contemplan en el artículo anterior, la Jueza o el Juez de transito designado legalmente será competente para conocer las etapas de instrucción fiscal, y de evaluación y preparatoria de juicio; y, de ser su pronunciamiento el de llamar a juicio, o se revoque el sobreseimiento, se designará mediante sorteo a otra jueza o juez de la materia , para que sustancie y resuelva la etapa de juicio; debiendo a esta o este remitirse el acta de la audiencia y los anticipos probatorios, conforme así lo prevé el artículo 608.6 del Código Orgánico Integral Penal.

Al respecto solo cabe hacer el análisis de porqué la Corte Nacional de Justicia estableció en el contenido de la resolución 09-2016 que la sustanciación de los delitos de tránsito cuando se ventilan en procedimiento Ordinario, es decir, cuando el delito no sea flagrante o aun siendo, su pena máxima es superior a 5 años.

Cuando un delito de tránsito se ventila en procedimiento Ordinario, desde el ingreso de la causa, cuando el agente Fiscal pone a conocimiento del juzgador mediante sorteo, la causa la



debe conocer el juez sorteado, dar paso a la Instrucción fiscal mediante la Audiencia de Formulación de Cargos, así mismo es el encargado de conocer y ventilar el proceso en su etapa de evaluación y preparatoria de juicio con su audiencia respectiva en donde, si el Fiscal titular de la acción penal pública presenta su dictamen acusatorio y el operador de justicia dicta auto de llamamiento a juicio, el proceso pasa mediante nuevo sorteo a conocimiento de otro juzgador de igual nivel pero así mismo unipersonal que dictará el fallo respectivo en la culminación de la audiencia de juicio.

Este es el objetivo y la naturaleza misma de la presente resolución mediante el cual se da paso a un nuevo sistema dentro de la administración de justicia, ya que en el pasado un solo operador de justicia unipersonal era el encargado de resolver este tipo de asuntos desde el inicio del proceso hasta dictar el fallo, situación que creaba o generaba a quienes accedían a la justicia, cierto grado de desconfianza sobre la imparcialidad del juzgador y esta situación tenía su lógica puesto que si una vez que conocía el juzgador de un proceso hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y si su resolución era el de dictar auto de llamamiento a juicio, el juez por el mismo hecho de llamar a juicio a una persona se consideraba que tenía los motivos y fundamentos suficientes para hacerlo y posteriormente indudable era que le sentenciara condenatoriamente puesto que desde el dictamen de llamamiento a juicio el juez ya emitía un juicio de valoración para poder realizarlo. Para resolver esta situación es que la Corte Nacional de Justicia se vio en la necesidad de expedir dicha resolución puesto que, si una situación generaba duda en la administración de justicia, y si ellos son los encargados de velar por la aplicación correcta de la misma, lo más lógico era que buscaran los medios para la solución de este tipo de situaciones que generaba inseguridad jurídica.

Lo más lógico es que una vez emitido el auto de llamamiento a juicio, el proceso pase a conocimiento de otro juzgador que no se encuentre contaminado del mismo, como lo



establece la resolución, lo único que tendrá en sus manos serán el acta de audiencia en donde se dictó dicha resolución y de los medios probatorios que se pretendían ser considerados en el proceso, para de esta manera garantizar la imparcialidad de un juzgador a la hora de conocer de un delito de tránsito.

3.- EFECTOS Y/O RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 09-2016 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EN LA PRÁCTICA

A consideración personal manifiesto que, si el objetivo que se quiere lograr mediante la promulgación de resoluciones es el mejorar la administración de justicia, la presente no tendría otro beneficio más que es el de aplicar esos objetivos, puesto que la imparcialidad de los juzgadores es condición primordial en un debido proceso para garantizar los principio y Derechos establecidos en la Constitución y en los Tratados y Convenios internacionales. Así mismo dichas resoluciones sobre todo en lo referente a la 09-2016 considero que los beneficiados son las personas procesadas por este tipo de delitos ya que al encontrarse inmersos o involucrados en estos asuntos, son los primeros interesados en que el procedimiento se desarrolle de una manera adecuada y que se les garantice y respete todos sus derechos así como se garantice seguridad jurídica y que su futuro respecto a su sanción sea decidida por un juez imparcial que dicte su sanción de acuerdo a las normas aplicables, pruebas presentadas y todos los elementos que sirvan o lleven al juzgador a sancionar o a ratificar el estado de inocencia.

Pero así mismo para poder emitir un juicio de valoración al presente trabajo es necesario y para ello en busca de mis objetivos realizaré una encuesta a varios profesionales del Derecho para conocer sus opiniones respecto a este seminuevo sistema de administración de justicia.



Al respecto del tema de investigación con la creación de las Unidades Judiciales Penales, son los competentes para conocer, entre varios asuntos, los delitos de tránsito y es en esta institución en donde se ventila hasta llegar a una sentencia. En el nuevo sistema para el desarrollo de la sanción en los delitos de tránsito, como fue objeto de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, los delitos una vez pasada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, una vez dictada el auto de llamamiento a juicio, dicho proceso pasa mediante sorteo al conocimiento de otra Unidad Judicial Penal de igual nivel quien será el competente para sentenciar un delito de tránsito una vez pasada la audiencia de juicio. Aspecto importante pues a consideración personal el juez quien dicta el auto de llamamiento a juicio es porque en su mente tiene o encontró en el procedimiento elementos suficientes para procesar a una persona y no sería lo adecuado o correcto legalmente que continúe en su conocimiento dicha causa, pues al dictar el auto de llamamiento a juicio, dicha autoridad cuenta ya o tiene en su mente un juicio de valoración puesto que contrario a la lógica será la idea de llamar a juicio a una persona para luego ratificar su estado de inocencia, por eso la necesidad de un juez que desconozca en un principio del caso que a consideraciones profesionales, como lo analizare en posteriores líneas, no se encuentra contaminado de dicha causa.

3.1.- ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO.

Dichas encuestas fueron realizadas a varios profesionales del derecho tanto en libre ejercicio como Funcionarios Públicos de las Unidades Penales que fueron objeto de dicha investigación, el análisis es trascendente puesto que, para poder establecer las diferentes conclusiones a este proyecto de investigación, es menester poder conocer las opiniones de



personas profesionales que se encuentran en relación con dichos casos sean funcionarios o Abogados que se encargan de respaldar a sus clientes.

Cabe manifestar que para la aplicación de dicha encuesta se realizaron, por parte del autor de la presente investigación, todos los procedimientos administrativos pertinentes y para respaldo de esta aseveración se encontrarán en los anexos los requisitos cumplidos a cabalidad, así como también las preguntas formuladas en su contenido para poder presentar las respectivas conclusiones a la misma.

Pregunta número 1.- Las opiniones vertidas por varias personas profesionales coinciden que la expedición de resoluciones en el ámbito penal, así como de cualquier otra materia (transito que es mi tema) no son las medidas correctas por parte de las autoridades competentes para resolver asuntos de tramites en delitos puesto que manifiestan que todas las normas deben estar estrictamente codificadas y que así mismo una resolución no debe estar por encima de las normas constitucionales que en muchos casos se han presentado en donde resoluciones, incluso reglamentos institucionales son de inmediata aplicación inobservando la norma o mandato supremo que en varias ocasiones no son ni consultadas.

Pregunta número 2.- Como personas profesionales que brindaron sus conocimientos en la presente encuesta, así como por su preparación tanto profesional como personal y analizadores de cada una de las normas que deben acatar, y que son expedidas año tras año, todos son conocedores de la resolución 176-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura así como la 09-2016 de la Corte Nacional de Justicia, esto demuestra la preparación de las personas que accedieron voluntariamente a responder y dar sus opiniones.

Pregunta numero 3.- las opiniones vertidas en torno a esta pregunta, son concordantes al establecer que en la ciudad de Cuenca se requieren de más Unidades de Justicia tanto en la



materia Penal como en la Civil , pero con unidades y tribunales pluripersonales especializados en cada una de las ramas, algunos de ellos manifiestan que se deberían crear tribunales especializados en materia de tránsito, flagrancias, que ayudarían a agilizar los procedimientos establecidos en la ley para la sanción de los delitos así como también poder contar con la seguridad que los casos se estarían llevando de manera adecuada y no dentro de una carga laboral excesiva.

Pregunta número 4.- a consideraciones profesionales, la resolución 176-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura beneficia a la sociedad puesto que se requiere de personal preparado para llevar el desarrollo y sanción de los diferentes tipos de delitos, pero así mismo al dotarles de diferentes competencias lo que se está haciendo es inobservar el principio de especialidad establecido por la Constitución Política del Ecuador mediante el cual cada delito debe ser sancionado por profesionales especializados en cada rama del Derecho. En cuanto a la resolución 09-2016 de la Corte Nacional de Justicia difieren en cada expresión puesto que algunos consideran positiva la reforma ya que se evita la contaminación del juzgador a la hora de la aplicación de justicia, pero en otras consideraciones hacen manifiesta la negativa puesto que un solo juzgador tiene ya el conocimiento de toda la causa y por ello mismo podría dictar una sentencia de acuerdo a todo lo demostrado en el contenido mismo del procedimiento.

Pregunta numero 5.- mediante el resorteo de la causa se garantiza imparcialidad en los procesos puesto que a consideraciones mayoritarias, el juez que conoce la causa no se encuentra contaminado con los elementos de investigación, pero son recomendaciones de que la causa, luego de dictarse auto de llamamiento a juicio, debería pasar a conocimiento de tribunales especializados en materia de tránsito, institución que en la ciudad de Cuenca todavía no cuenta y que fue materia de recomendación en la pregunta número 3. Así mismo



una persona consultad manifiesta que con este régimen de competencias se evitan en muchos casos los subjetivismos que pueden presentarse en diferentes casos.

A título personal considero que, si bien concuerdo con que se debería sortear a un funcionario de superior nivel, la aplicación de este sistema garantiza por lo menos un poco de seguridad jurídica a los procesados en el sentido de que el nuevo funcionario deberá realizar un análisis extensivo a la causa, analizar todos los elementos probatorios para dictar una resolución sin un juicio de valoración anticipado.

Pregunta numero 6.- las respuestas mayoritarias a la investigación realizada concuerdan que no existen grandes inconvenientes a la hora de la aplicación del nuevo régimen de competencias, puesto que el nuevo juez, encargado de conocer la causa, es imparcial porque no está contaminado con los elementos investigativos ni con el inicio mismo de todo el proceso sino que deberá analizar los documentos y medios probatorios puestos a su conocimiento y en base a ello dictar su resolución aunque como recomendación general manifiesta en el contenido de tales, debería conocer el caso una tribunal especializado.

Pregunta numero 7.- el régimen de competencias actual en general garantiza imparcialidad en la administración de justicia referido claro está a los procedimientos en delitos de transito pero así mismo concordantes son las opiniones de que al ser re sorteado el proceso debería pasar a conocimiento de tribunales especializados con juzgadores de superior nivel para poder dictar una sentencia que brinde seguridad jurídica a quienes intervienen en el proceso sea como procesado o la otra parte en el caso de existir acusación particular.



4.- CONCLUSIONES

Puedo decir entonces que los delitos de tránsito no son nuevos en nuestra legislación, sino que han tenido trascendencia desde la antigüedad con la promulgación de normas que lo han regulado si bien en el principio de una manera escueta o dispersa han pasado por una serie de transformaciones para regular su trámite y sanciones a las diferentes maneras que se podrían presentar para de esta forma ir brindando seguridad jurídica a las ciudadanos que hacen uso o acceden a la administración de justicia, tanto los implicados como para los profesionales que son los encargados de impulsar los procesos.

La persona que comete este tipo de delitos, para ser considerados como tales, no lo hacen con voluntad propia o con la decisión firme de causar daño en otra persona o bienes, sino que su cometimiento está ligado a una serie actos de impericia o falta de cuidado en donde el individuo comete y que, si hubiera tomado las medidas necesarias para evitarlo no se vería de ninguna manera involucrado en este tipo de asuntos como por ejemplo el conducir un vehículo en estado de embriaguez, realizando o cometiendo así un delito culposos que como sabemos no se realizan con conocimiento, ventaja, intención, etc. Lo que hace la persona cometidora de este tipo de delitos es infringir el deber objetivo de cuidado.

Este tipo de delitos en la actualidad han llegado a ser de gran consideración para que incluso se creen instituciones especializadas para su investigación como por ejemplo las FISCALIAS ESPECIALIZADAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO, La OIAT, Peritos especializados ya que por su complejidad requiere del estudio minucioso de cada uno de los elementos que lleven a su correcto desarrollo en cada una de las etapas así sea pre-procesal como es la indagación previa así como en etapa procesal en las unidades Judiciales Penales.



Al ser este tipo uno de los delitos que conlleva un resultado lesivo contra la vida, el Estado mediante su poder punitivo regula cada una de las situaciones bajo las cuales se podrían presentar ya que en una misma circunstancia pudieron presentarse varios factores para su cometimiento y serán los mismos que servirán para poder aplicar la sanción respectiva que corresponda bajo prevenciones que se quiera ocultar el verdadero delito puesto que no sería el mismo si consideramos por una parte un delito de tránsito con muerte que el cometimiento de un asesinato con uso de un medio de transporte, entonces para esto mismo es que la ley es clara en cada una de sus partes al establecer condiciones y las sanciones merecedoras por el acto.

Respecto a la creación de la Unidad Penal con sede en el Cantón Cuenca, he podido visualizar los beneficios para la sociedad misma, y no solo para quienes día a día hacen uso de la administración de justicia, a fin de que con ello considero se garantiza con esta resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura lo que se debería solventar esto es, la seguridad jurídica en los procesos, condición sine qua non para la aseveración de que las normas varían según la sociedad y que las mismas van dirigidas a su beneficio.

Es necesidad primordial de que conforme avanza la sociedad, las normas jurídicas se vayan acoplando a cada realidad y para ello se requerirán así mismos profesionales preparados en cada una de las ramas del derecho a fin de que las etapas en cada proceso se realicen sin conflicto y en Unidades Penales Independientes sin temor a aplicar la verdad sobre los intereses particulares que pueden presentarse en los diferentes ámbitos de la administración de justicia. Por ello la creación de la Unidad Judicial Penal en Cuenca y la eliminación de algunas Unidades Judiciales especiales deben reflejar en la actualidad que su institución creadora no se equivocó a la hora de emitir dicha resolución, debe ser un reflejo del avance de la sociedad y la justicia a la par.

Autor: Juan Carlos Illescas Zhicay



El nuevo sistema creado mediante resolución 09-2016 de la Corte Nacional de Justicia, según las investigaciones realizadas y bajo los criterios de varios profesionales en derechos, trajo consigo reformas positivas a las anteriores en donde ni siquiera se pronunciaba sobre las situaciones que se podrían presentar en la Unidad Judicial y la garantía de imparcialidad en los jueces y por ende seguridad jurídica en los procesos se debe ver reflejada diariamente no solo en este tipo de trámites sino en todas las materias en donde han existido resoluciones tendientes a la mejora y seguridad en la ventilación de los procesos.

Realizado el análisis o estudio de los casos ventilados en la Unidad Judicial Penal “K” del Complejo Judicial de la ciudad de Cuenca en donde al momento de realizar la investigación el Juzgador era el Doctor Carlos Jervez quien gracias a su tiempo y atención brindada para poder estudiar casos de su Unidad Penal puedo concluir que, el actual régimen de competencias para poder conocer y ventilar los delitos de tránsito garantiza seguridad jurídica puesto que, si el juzgador de primera instancia dictó auto de llamamiento a juicio es porque en su conocimiento tenía la idea de culpabilidad del procesado en su mente se generó un juicio de valor anticipado, situación que varía al pasar a conocimiento de otro juez quien no se encuentra familiarizado con dicho asunto y como dicen los profesionales en Derecho “ No se encuentra contaminado”.



5.- RECOMENDACIONES

Una recomendación a la creación de Unidades Penales y el nuevo régimen de competencias surgido a partir de la resolución 09-2016 a sugerencia personal considero que los profesionales involucrados en el ejercicio de sus funciones o como patrocinadores de las causas que se ingresan a diario, se desenvuelvan en sus actividades de una manera leal a los procesos, con probidad, eficiencia, responsabilidad y sobre todo sin temor a la hora de tomar ciertas decisiones en cada caso, para que de esta manera se vea reflejado en la actualidad de que las reformas al ordenamiento jurídico ecuatoriano van en beneficio de la sociedad, para ello es requerimiento esencial la existencia de funcionarios públicos sin temor en sus decisiones ya sea a otra autoridad superior o cualquier otra entidad, en conclusión una autoridad capacitado para desarrollar correctamente sus competencias y firme en sus decisiones.

Así mismo como recomendación podría manifestar que, si bien el conocimiento del proceso mediante nuevo sorteo a partir del auto de llamamiento a juicio emitido por un juez, pasa a conocimiento de otro, garantiza en parte seguridad jurídica, a consideración no solo personal sino profesional según la información recabada, los procesos a partir de la etapa señalada, deberían ser conocidos por Tribunales Penales Especializados en materia de Tránsito como si lo hay para otros tipos penales en donde se resuelve en su respectiva etapa por jueces que integran un tribunal pluripersonal, para de esta forma saber que las decisiones tomadas respecto de la situación jurídica del procesado es analizada por varios profesionales que consideren cada uno de los elementos necesarios para condenarlo o ratificar su inocencia.

Con la expedición de la resolución 176-2014 del Peno del Consejo de la Judicatura, se crearon las Unidades penales en Cuenca, pero se les dotó de demasiadas competencias que a consideración personal podría afectar de forma negativa a la sustanciación de los procesos ya



que en cada materia existen elementos diferentes a ser considerados, como recomendación considero que deberían existir jueces de Tránsito para poder conocer estos procesos únicamente para de esta manera garantizar el principio constitucional de especialidad. Todo esto no porque los jueces actualmente no cuenten con la preparación necesaria sino por ser una medida que garantiza seguridad jurídica en toda la extensión de la palabra y con todas sus garantías.



BIBLIOGRAFÍA

- Basantes, D. J. (2009). El debido proceso penal. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones.
- Basantes, J. S. (2009). El Debido Proceso Penal. En J. S. Basantes. Quito: Corporacion de estudios y publicaciones.
- Burneo, D. R. (2009). Derechos y Garantías Constitucionales en el Ecuador-Evolucion y Actualidad. En D. R. Burneo. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones .
- Cabanellas, G. (1979). *Diccionario Juridico Elemental*. Editorial Heliasta S.R.L.
- Carbonell, M. (14 de marzo de 2012). *miguelcarbonell.com*. Obtenido de http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Formalidades_esenciales_del_procedimiento.shtml
- Castillo, D. A. (24 de Noviembre de 2005). *DerechoEcuador.com*. Obtenido de DerechoEcuador.com: <https://www.derechoecuador.com/la-detencioacuten-en-firme-y-la-detencioacuten-preventiva-frente-a-la-misioacuten-policial>
- Chavez, L. P. (2016). Las Medidas Cautelares Personales y si Incidencia Juiridica en el Acusado en los Delitos de Transito por muerte, tramitados en la Unidad Judicial Penal del Canton Riobamba periodo de enero a octubre de 2014. Riobamnda , Ecuador .
- Constituyente, E. P. (2014). Ley Organica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. Quito , Pichincha, Ecuador: Corporacion de Estudios y Publicaciones.
- Cornejo, J. S. (14 de marzo de 2016). *DerechoEcuador.com*. Obtenido de <https://www.derechoecuador.com/el-procedimiento-abreviado-en-el-coip>
- CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES . (2010). *LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO*. QUITO.
- Corporacion de Estudios y Publicaciones. (2008). *Constitucion Politica del Ecuador*. Quito: Corporacion de Estudios y Pblicaciones.
- Corporacion de Estudios y Publicaciones. (2017). *Codigo Organico Integral Penal*. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones.
- Dir., E. A. (2010). *DERECHO PENAL DOCTRINAS ESCENCIALES* . Buenos Aires : Fondo Editorial de Derecho y Economia.
- Donna, E. A. (s.f.). *DERECHO PENAL PARTE GENERAL*. RUBINZAL-CULZONI.
- Franco, D. E. (s.f.). Estudio de la Teoria de la Imputacion Objetiva en Derecho Penal. En D. E. Franco.
- Frisancho., J. L. (s.f.). La Teoria de la Imputacion Objetiva en el Sistema Funcional del Derecho Penal.



- Fuente, P. V. (27 de Agosto de 2015). *CRIMINAL-MENTE*. Obtenido de <http://criminal-mente.es/2015/08/27/el-iter-criminis-o-fases-de-realizacion-del-delito-desde-el-punto-de-vista-penal/>
- Garrone, J. A. (2005). *Diccionario Juridico. Tomo III*. Buenos Aires : Lexis.Nexis.
- Guzman, D. J. (2013). *Garantias y Principios Fundamentales del Debido Proceso y su aplicacion efectiva en la Legislacion Penal Ecuatoriana*. Cuenca, Azuay, Ecuador.
- Guzman, D. J. (2013). *Garantias y Principios Fundamentales en el Debido Proceso y su aplicacion efectiva en la Legislacion Penal Ecuatoriana*. Cuenca, Azuay, Ecuador.
- JUSTICIA DE CERCA* . (Septiembre de 2017). Obtenido de http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2017/09_SEPTIEMBRE/IMAGES/13.09.17%20Justicia%20de%20Cerca,%20sobreseimiento%20en%20materia%20penal.pdf
- Legislativas, P. d. (2 de Agosto de 1996). *Ley de Transito y Transporte Terrestre*. Quito , Pichincha, Ecuador.
- Lenin, G. C. (Junio de 2014). *Los Dispositivos eElectronicos de Control como complemento al beneficio de prelibetad encaminado a disminuir la Sobrepoblacion Carcelaria en los Centros de Rehabilitacion Social Zona 2*. Quito, Pichincha, Ecuador .
- LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. (2 de AGOSTO de 1996). QUITO, PICHINCHA, ECUADOR.
- Lima, R. S. (2017). *El Principio de Igualdad entre las Partes en el Proceso Penal en Mexico*. Guanajuato, Mexico.
- Luque, M. T. (24 de Noviembre de 2005). *DerechoEcuador.com*. Obtenido de <https://www.derechoecuador.com/derecho-al-juez-natural-y-legal>
- Manuel Cancio Melia, M. F. (1998). *Estudios sobre la Teoria de la Imputacion objetiva*. Argentina: AD-HOC S.R.L Buenos Aires.
- Parra, A. N. (23 de Noviembre de 2010). *La Motivacion de las Resoluciones en materia penal*. Obtenido de DerechoEcuador.com: <https://www.derechoecuador.com/la-motivacion-de-las-resoluciones-en-materia-penal>
- Parra, N. S. (23 de Novembere de 2010). *DerechoEcuador.com*. Obtenido de <https://www.derechoecuador.com/la-motivacion-de-las-resoluciones-en-materia-penal>
- Pasquel, D. A. (Abril de 1993). *TEORIA DEL DELITO Y TENTATIVA*. Obtenido de https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/1993/02/7_teoría_del_delito_y_tentativa.pdf
- Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente. (2017). *Ley Organica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial*. Quito, Pichincha, Ecuador: Corporacion de Estudios y Publicaciones.



- publicaciones, C. d. (2009). *Codigo Organico de la Funcion Judicial*. Quito: Corporacion de Estudios y Publicaciones.
- Publicaciones, C. d. (2017). *Codigo Organico Integral Penal. Marco Legal*. Quito, Pichincha, Ecuador: Departamento Juridico Editorial de la Corporacion de Estudios y Publicaciones.
- Ramirez, M. A. (2005). *El debido proceso*.
- Ranea, R. G. (2011). Principio de Bilateralidad o Contradiccion.
- Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial*. (2012). Quito: Corporacion de estudios y publicaciones .
- Siccha, R. S. (2004). La acusacion fiscal de acuerdo al Codigo Procesal Penal 2004.
- Soler, S. (1945). *Derecho Penal Argentino*. Buenos Aires: Editorial LA LEY BS. AIRES.
- Turnes, A. V. (2015). La Presuncion de Inocencia-Una Aproximacion Actual al Derecho. *Revista Catalana de Dret Public*, 215-216.
- Valentina, H. S. (27 de 02 de 2016). Analisis comparado de la aplicacion del dispositivo electronico como medida alternativa a la prision preventiva en el Ecuador. Guayaquil , Guayas , Ecuador .
- Welzel, H. (2007). *Estudios de Derecho Penal*. Buenos Aires: IB-F .



UNIVERSIDAD DE CUENCA

ANEXOS